

Coyhaique, veintidós de enero de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

**PRIMERO:** Comparece don **PABLO ANDRÉS BULNES PARDO**, cédula nacional de identidad N° 10.068.402-0, Bioquímico, domiciliado en calle Los Ñires N° 129, comuna de Coyhaique, e interpone demanda, en procedimiento de aplicación general, por despido injustificado, indebido y/o improcedente y cobro de prestaciones laborales, en contra de su ex empleador la **I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE**, RUT N° 69.240.300-2, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada legal y judicialmente por su Alcalde don **RIGOBERTO ALEJANDRO HUALA CANUMAN**, RUT N° 9.818.825-2, Ingeniero (e) Administración de Empresas, ambos domiciliados para estos efectos en calle Francisco Bilbao N° 357, comuna y ciudad de Coyhaique, en consideración a los argumentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:

**LOS HECHOS:**

**EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL.**

Antecedentes de contexto.

Ingresé a la I. Municipalidad de Coyhaique por primera vez, con fecha 02 de enero de 2013, de acuerdo al Decreto Alcaldicio N° 2, de fecha 07 de enero de 2013, el cual me nombra en calidad de suplencia en el escalafón profesional como jefe del departamento de Medio Ambiente y Servicios, durante los meses de enero a diciembre del mismo año.

Posteriormente, durante los años 2014 a 2016, se me contrató en base a mi experiencia profesional, conocimiento en formulación de proyectos y gestión municipal, destinándose a la Secretaría de Planificación Comunal, (SECPLAC), en calidad de Profesional de Apoyo en Formulación de Proyectos.

Se me prorrogó mi contrato a honorarios para el año 2017, mediante Decreto Alcaldicio N° 6.979 de fecha 15 de diciembre del 2016, cumpliendo mis funciones entre los meses de enero a mayo de ese año 2017, fecha en que presente mi renuncia.

Hago presente que, durante todos estos años, me desempeñé cumpliendo básicamente las mismas funciones profesionales, las cuales eran en todo caso funciones permanentes, tanto para mí, como para mi empleadora. Trabajé durante 4 años y 5 meses para mi ex empleadora en este primer periodo.

**COMIENZO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE SUSTENTA ESTA DEMANDA.**

1. Luego de los años anteriores que presté servicios a mi ex empleadora me volví a trabajar, a la I. Municipalidad de Coyhaique a contar del 1 de octubre de 2017 al 14 de marzo 2018, bajo la modalidad contractual de contrato de trabajo, al término del cual se firmó un finiquito.



2. Posteriormente, firmé un nuevo contrato de trabajo a contar del día 15 marzo, el cual tuvo vigencia hasta el día 15 septiembre 2018, al término del cual se firmó un finiquito.

3. A continuación, se suscribió un nuevo contrato de trabajo a contar del día 16 de septiembre, el cual tuvo vigencia hasta el día 31 diciembre 2018, al término del cual se firmó finiquito.

Todos los contratos de trabajo que se suscribieron, fueron para prestar en lo formal apoyo administrativo en las rendiciones de proyectos de la oficina de empleos de la Municipalidad de Coyhaique.

4. Luego, mediante el decreto Alcaldicio N° 79 de fecha 18 de enero del 2019, se me renovó la contratación de mis servicios, por medio de un aparente contrato a honorarios, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019, cumpliendo las mismas funciones que los años anteriores.

5. Finalmente, por Decreto Alcaldicio N° 155 de fecha 10 de enero del 2020, se me contrató a honorarios para toda la anualidad, es decir, entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, pero mi ex empleadora determinó unilateralmente poner término a mi contrato de forma injustificada y sin causa legal, con fecha 1 de junio de 2020.

6. En consecuencia, presté servicios para la demandada a contar del día 1 de octubre de 2017 y hasta el día 1 de junio de 2020, es decir, 2 años y 7 meses, de forma ininterrumpida, bajo vínculo y subordinación de la demandada y cumpliendo las mismas funciones.

Si bien, mi relación laboral inició con todas las formalidades del contrato de trabajo entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, a partir del 1 de enero de 2019 y hasta la fecha de mi despido, no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 Incisos 1° y 2°, del Código del Trabajo, es decir, no formalizó por escrito en los plazos legales el respectivo contrato de trabajo que respaldara mi relación laboral entre 1 de enero de 2019 y el 1 de junio de 2020. Sin embargo, se me impuso firmar una serie de supuestos contratos sucesivos a Honorarios a suma alzada, con el objeto de aparentar o disfrazar la relación laboral por una relación de contrato de carácter civil. Inclusive se me impuso como carga en virtud de dichos contratos aparentes, la obligación de emitir mensualmente previo a cada pago de la remuneración mensual, una boleta de prestación de servicios.

Dichos contratos de trabajo y convenios a honorarios, (01/10/2017 a 01/06/2020) sólo encubrían la relación laboral de carácter indefinida que me ligaba para con la demandada, en virtud de la renovación sucesiva de dos y más contratos a plazo fijo, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, y por la aplicación del principio de la primacía de la realidad, que es demostrativo en la praxis de mi calidad de trabajador respecto de la demandada, encontrándome subordinado en



cuanto a las labores que debía llevar a cabo, como asimismo por la existencia de varias evidencias de la relación laboral, como lo son: el cumplimiento de jornada de trabajo, en mi caso de 44 horas semanales, remuneración mensual a cambio de mi trabajo, obligatoriedad de registrar mi jornada diaria de trabajo tanto a mi ingreso como a mi salida, poseía dependencia directa y subordinación de la demandada, el no cumplimiento de la jornada diaria de trabajo daba derecho a la empleadora a descontar las horas no trabajadas de dicha jornada, tenía además derecho a aguinaldo y capacitación, como también a 6 días de permiso al año dividido en medias jornadas al igual que todos los trabajadores de la municipalidad, concediéndome además el derecho al pago de un bono trimestral, y poder ejercer o solicitar días interferidos, debiendo recuperar dichos días con horas de trabajo ejecutadas antes o después, de hacer efectivo el ejercicio del mismo.

También se me reconocía mi derecho a vacaciones o feriado legal anual con incremento de 5 días que se les reconocen a los trabajadores de zonas extremas, entre otros tantos indicios de esta relación laboral.

Se pretendía que mi contratación lo fuera en el marco de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 18.883, es decir, un arrendamiento de servicios personales, sin embargo mis labores realizadas de manera habitual y permanente en el tiempo, sujeta a una jornada de trabajo e instrucciones de mi jefatura, rindiendo cuenta de mis funciones, y recibiendo por ellas un contraprestación en dinero de manera mensual, por lo tanto se está en presencia de un vínculo de naturaleza laboral, y por consiguiente regido por el Código del Trabajo.

Es preciso aclarar que para la contratación a honorarios deben concurrir los siguientes requisitos: a) que se trate de labores accidentales y no habituales o de cometidos específicos; y b) que se realicen las labores por profesionales o técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias; que, en el caso de que se trata, no se dan o no se encuentran presentes, ya que los servicios se han extendido, en la misma función, por cerca de 2 años y 7 meses, realizando funciones permanentes.

En lo que respecta a mi jornada de trabajo, tal como ya lo mencioné anteriormente, ésta era de 44 horas semanales, distribuidos en jornada de lunes a viernes, debiendo para estos efectos, registrar mi ingreso y salida a través de los medios de registro de asistencia.

Por los servicios prestados recibí una contraprestación en forma ininterrumpida por casi 4 años, más aguinaldos en los meses de septiembre y diciembre, siendo mi remuneración mensual la suma de \$ 1.614.600 (un millón seiscientos catorce mil seiscientos pesos) líquidos, más un bono trimestral de \$ 441.115, con lo cual mi remuneración mensual ascendía finalmente a la suma de \$ 1.761.638.

SOBRE LOS 3 FINIQUITOS FIRMADOS.

En relación a los finiquitos suscritos y del cual dan cuenta este relato, su suscripción me era impuesto como requisito para poder proceder a la firma de un nuevo



contrato, pero estos en los hechos nunca cumplieron el fin jurídico establecido en la ley, en cuanto nunca produjo el efecto real de poner término a la relación laboral y prueba de ello es que seguí prestando mis servicios de forma ininterrumpida desde el día 1 de octubre de 2017 hasta el día 1 de junio de 2020, sin mediar entre esas fechas ninguna laguna o día sin que prestara mis servicios a la demandada, manteniendo vigente la relación laboral, motivo por el cual dichos finiquitos son nulos o debieran declararse su nulidad o ineficacia por parte de este tribunal, en consecuencia, al haberse prorrogado a lo menos en 5 periodos, mi relación laboral, desde octubre de 2017 en adelante, mi contrato era de duración indefinida. En estos mismos términos lo consagra y advierte el código del trabajo al señalar en su art. 159 N° 4 que "El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un periodo de quince meses, contado desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida."

#### SOBRE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑABA.

Mis funciones como trabajador de la I. Municipalidad de Coyhaique eran, entre otras, la prestación de servicios profesionales habituales como profesional de proyectos, en las reparticiones primero en la oficina de Empleo y luego en SECPLAC, entre los años 2018 al 2020, con tareas principalmente relacionadas con:

- Asesorar y fortalecer el equipo profesional de la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAC) de la comuna de Coyhaique, en la formulación y ejecución de proyectos.
- Dirigir la ejecución de proyectos encomendados bajo financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), bajo metodología circular 33, desde su elaboración hasta su Financiamiento.
- Dirigir la ejecución de proyectos encomendados bajo financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Regional (SUBDERE), desde su elaboración hasta su Financiamiento.
- Desarrollar más de 60 presentaciones e informes ejecutivos para facilitar la evaluación de proyectos e implementar la mejora de procesos relacionados con la solicitud de recursos, rendiciones y cierres de proyectos (FRIL, FRIL Empleo, SUBDERE).
- Efectuar la planificación, elaboración de presupuestos, selección de proveedores y gestiones para la adquisición de insumos para el funcionamiento de la Unidad de SECPLAC.
- Elaboración del perfil (Etapa de Ejecución), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE CIUDAD DE COYHAIQUE", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$ 43.200.000.- (Cuarenta y tres millones doscientos mil pesos).



- Elaboración del perfil (Etapas de Ejecución), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ASISTENCIA TÉCNICA PARA SANEAMIENTO SANITARIO", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$ 27.720.000.- (veintisiete millones setecientos veinte mil pesos).

- Elaboración del perfil (Adquisición de Terrenos), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA COMITÉS DE VIVIENDAS ILUSIÓN JOVEN, LLÉVAME AL FUTURO II Y AMANECER CON ESPERANZA, COYHAIQUE", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB) en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$734.898.265.- (Setecientos treinta y cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos sesenta y cinco pesos).

- Elaboración del perfil (Adquisición de Terrenos), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ADQUISICIÓN DE TERRENO COMITÉ DE VIVIENDA SAN LUIS GUANELLA", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB) en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$195.000.000.- (Ciento noventa y cinco millones de pesos).

- Elaboración del perfil (Adquisición de Terrenos), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ADQUISICIÓN TERRENO LOTE 29-1C3, COPA DE AGUA.", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB) en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$24.003.800.- (Veinticuatro millones tres mil ochocientos pesos).

- Elaboración del perfil (Adquisición de Terrenos), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN ESTANQUE PARA AGUA POTABLE DE 500 M3 EN LOTE 29 - 1C3", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de saneamiento sanitario por la suma de \$371.675.000.- (Trescientos Setenta y un Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Pesos).

- Elaboración del perfil (Adquisición de Activos No Financieros), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA UNIDAD VIAL DE LA COMUNA DE COYHAIQUE", que dio lugar a financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén por la suma de \$237.595.000.- (Doscientos treinta y siete millones quinientos noventa y cinco mil pesos). Código BIP: 30458835-0.

- Elaboración del perfil (Adquisición de Activos No Financieros), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MULTIPROPÓSITO PARA SERVICIOS BÁSICOS, COMUNA DE COYHAIQUE", que dio lugar a financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén por la suma de \$429.985.230. - (Cuatrocientos veintinueve millones novecientos ochenta y cinco mil doscientos treinta pesos). Código BIP: 30459091-0.



- Colaboración en diseño del perfil (Adquisición de Activos No Financieros), obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD VIAL DE LA COMUNA DE COYHAIQUE, 2019", que dio lugar a financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén por la suma de \$507.413.334.- (Quinientos siete millones cuatrocientos trece mil trecientos treinta y cuatro pesos). Código BIP: 40011479-0.

- Colaboración en la elaboración del perfil y obtención de aprobación técnica para el proyecto (RS): "CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS FACHADAS Y OTROS ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE", que dio lugar a financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén por la suma de \$98.184.000.- (Noventa y ocho millones ciento ochenta y cuatro mil pesos). Código BIP: 30366278-0.

- Colaboración en la revisión para obtención de aprobación técnica del perfil para el proyecto: "MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL PUERTO AYSÉN", que se encuentra en proceso de revisión para el financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén por la suma de \$1.069.629.000.- (Mil sesenta y nueve Millones seiscientos veintinueve mil pesos). Código BIP 30463415-0.

- Elaboración del perfil y obtención de aprobación técnica para el proyecto (RS): "CONSTRUCCIÓN CASA DEL DEPORTISTA EN COYHAIQUE", que se encuentra en proceso de revisión para el financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén por la suma de \$1.086.203.160.- (Mil ochenta y seis Millones doscientos tres mil ciento sesenta pesos). Código BIP 30483101-0.

- Elaboración de perfil para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL EN COYHAIQUE", que se encuentra en proceso de Diseño para su posterior financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén. Código BIP 40016313-0.

- Elaboración de perfil para el proyecto: "REPOSICIÓN MEDIA LUNA CLUB DE RODEO CHILENO VALLE SIMPSON", que se encuentra en proceso de Diseño para su posterior financiamiento F.N.D.R., Región de Aysén. Código BIP 40017079-0.

- Colaboración en la elaboración del perfil y obtención de aprobación técnica para el proyecto "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO POBLACIÓN VIENTO SUR DE BALMACEDA", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$41.238.000.- (Cuarenta y un millones doscientos treinta y ocho mil pesos).

- Postulación y seguimiento de la iniciativa "IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES DE EQUIPOS DOMICILIARIOS DE COMBUSTIÓN A LEÑA, CIUDAD DE COYHAIQUE". Postulado en relación con el concurso "RETO DE INNOVACIÓN EN INTERÉS PÚBLICO" del Ministerio de Ciencia y Tecnología.



- Elaboración del perfil (Etapa de Ejecución), para la obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR ALTO MAÑIHUALES", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de Mejoramiento de Barrios por la suma de \$ 128.854.522.- (Ciento veintiocho millones ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintidós pesos).

- Elaboración del perfil (Etapa de Ejecución), para la obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR LAGO NORTE", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$ 137.151.196.- (Ciento treinta y siete millones ciento cincuenta y un mil ciento noventa y seis pesos).

- Elaboración del perfil (Etapa de Ejecución), para la obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR RÍO NORTE", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$ 169.186.499.- (Ciento sesenta y nueve millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos).

- Elaboración del perfil (Etapa de Ejecución), para la obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR RODEO LOS PALOS", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de mejoramiento de barrios por la suma de \$ 212.684.925.- (Doscientos doce millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco pesos).

- Elaboración del perfil (Etapa de Ejecución), para la obtención de aprobación técnica y financiera para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR BAJO HONDO", que dio lugar a financiamiento desde SUBDERE (PMB), en línea de Mejoramiento de Barrios por la suma de \$ 76.961.033.- (Setenta y seis millones novecientos sesenta y un mil treinta y tres pesos).

Éstas sólo eran parte de mis funciones permanentes, la cuales se fueron generalizando y ampliando cada año, lo cual iba quedando plasmado con la firma de los sucesivos contratos o convenios, todas las funciones que en los hechos prestaba al momento de mi despido injustificado, ya las desempeñaba desde mi contrato de trabajo suscrito a contar del 1 de octubre de 2017 en adelante, hasta la fecha de mi despido, el objetivo de mi ex empleador era intentar modificar tanto los objetivos como tipos de contratos y mis funciones pero sólo "en papel", precisamente para no develar la naturaleza real del contrato, esto es, la naturaleza laboral de los servicios que se yo le prestaba, siendo sólo una imposición en papel con apariencia de legalidad o juridicidad, pero en los hechos y en la realidad, mis funciones durante los 2 años y 7 meses de relación fueron las mismas y permanentes en el tiempo.

Así es que a estas funciones me dedicaba diariamente, gestionando, y realizando las distintas tareas asignadas por mis jefaturas que eran las habituales del servicio como



asimismo daba respuesta a todos los requerimientos de diferentes autoridades regionales y comunales de la región de Aysén, exponiendo incluso en representación del alcalde y del Municipio en diversas actividades públicas.

Además, hago presente que hubo una serie de responsabilidades que debí ir asumiendo que no estaban señaladas en ninguno de los contratos que suscribí por escrito, pero que asumí que eran inherente a mis obligaciones las cuales probaré en la etapa procesal pertinente.

Mis labores eran controladas, ordenadas y supervigiladas por mi empleador. En este sentido es que debía efectuar un reporte permanente de mis funciones, informando acerca de los resultados y demás gestiones realizadas, mensualmente.

En el ejercicio de mis funciones debía, dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa definido en el inciso 2° del artículo 52, de la ley N° 18.575.

#### EN CUANTO AL DESPIDO INJUSTIFICADO.

Con fecha 1 de junio de 2020, fui despedido por la demandada mediante correo electrónico suscrito por doña Carla Albornoz Neira, encargada del Departamento de Recursos de Humanos, de la I. Municipalidad de Coyhaique y cuyo texto señala, lo siguiente: "Estimado, junto con saludar, adjunto a usted Decreto Alcaldicio N° 2228 en el cual pone término de contrato de prestación de servicios entre Ud. y el municipio."

Pues bien, mi despido resulta ser absolutamente injustificado, en razón que no se ha invocado causa legal alguna contemplada en el Código del Trabajo para proceder al término de mi relación laboral con la demandada, como tampoco se acreditó los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral.

Por lo cual, mi empleador me adeuda todas las prestaciones laborales que se deriven del contrato de trabajo, como lo son las indemnizaciones, recargos legales y las cotizaciones previsionales durante toda la vigencia de mi relación laboral hasta la fecha de mi despido.

#### EL DERECHO

1. En cuanto a la existencia de la relación laboral desde el día 1 de octubre de 2017.

El artículo 3° del Código del Trabajo, define qué debe entenderse por empleador, a la "persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personal en virtud de un contrato de Trabajo". En armonía con lo anterior, el artículo 7 del mismo cuerpo legal, consagra como elemento de la esencia del contrato de trabajo, la prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador, estableciendo el artículo 8 en su inciso 1° que "Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo", esto es bajo subordinación y dependencia circunstancia que se ha dicho concurren en la especie. La subordinación jurídica a la que se refieren los artículos





3° , 7° y 8° del Código del Trabajo corresponde a la situación de control y mando en que se encuentra el empleador en relación a su contraparte del contrato, el trabajador, quien a su turno se encuentra en una situación de sujeción personal que se caracteriza porque su trabajo se inserta en una organización de medios personales y materiales -la empresa- que él no controla ni dirige.

Se ha establecido que el vínculo de subordinación y dependencia se manifiesta en la práctica a través de diversas circunstancias concretas que materializan el citado control y sujeción, precisándose entre otras: la obligación de asistencia al trabajo, cumplimiento de un horario, subordinación a instrucciones y controles provenientes del empleador, la obligación de asumir día a día la carga de trabajo, la continuidad de los servicios prestados, utilización de infraestructura o materiales del empleador, sujeción a un régimen disciplinario ajeno, etc. (DICTAMEN DT 3257/89 de fecha 29 julio 2005), elementos todos presentes en la relación laboral.

A su vez y a mayor abundamiento, el artículo 42 letra a) del Código del Trabajo, establece una presunción en materia de jornada de Trabajo, que es necesario señalar: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22, se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día, el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuar descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador. Así mismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando el empleador por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador solo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en Regiones diferentes de la del domicilio del empleador".

Ahora bien, no obsta a las consideraciones anteriores, el hecho de que el trabajador tenga suscrito un contrato de prestación de servicios a honorarios, o se emita boleta de honorarios, cuando en la realidad los hechos son distintos, por cuanto la sola concurrencia de las condiciones precedentemente enunciadas, determinan que el trabajador está sujeto a dependencia y subordinación aun cuando las partes le hayan dado otra denominación a la respectiva relación jurídica. Ello por cuanto es principio fundamental de la legislación laboral el de la primacía de la realidad, que consiste en otorgar prioridad a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido.

En consecuencia, se ha agregado, que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, debe darse preferencia a los hechos. De este modo, en el caso en cuestión, más allá de las apariencias de las formas jurídicas suscritas entre las partes que llevarían



formalmente a entender que el trabajador involucrado está exento de la jornada de trabajo y de otras obligaciones y derechos de naturaleza laboral, es necesario en concordancia con las definiciones legales citadas, y en aplicación del denominado principio de la primacía de la realidad, determinar en la realidad fáctica la situación del mismo para determinar cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones por parte de su empleador. Así, por lo demás, lo ha declarado reiteradamente la Excma. Corte Suprema, que ha sostenido que entre los principios imperantes en materia del Derecho del Trabajo, y que sirven de inspiración al derecho positivo en esta rama, se encuentra el de la primacía de la realidad que significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. (Rol 21.950- 16-03-1987). De esta manera la actual doctrina y jurisprudencia en función del principio protector de los derechos laborales, ha sostenido que la sola existencia o emisión de boletas de honorarios y la suscripción de un contrato de honorarios no hace presumir la existencia de una relación civil, sino que debe estarse a los supuestos fácticos reales y no a la apariencia que las partes o una de ellas ha querido darle, más aun teniendo presente la naturaleza irrenunciable de los derechos laborales.

Así por ejemplo en fallo dictado causa O-116-2009, por el 2° JLT de Santiago, de fecha 20.11.2009, el que en su considerando NOVENO sostuvo lo siguiente: "Que el hecho de haber otorgado boletas de honorarios no es un antecedente que pueda llevar necesariamente a concluir de forma absoluta, la ausencia de una relación laboral. Debe recordarse que el contrato de trabajo, según lo dispone el artículo 7 del Código del Trabajo, es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Este es consensual, es decir, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes contratantes, situación que se traduce en que la relación jurídica que se origina nace a la vida del derecho al producirse el acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador, con independencia del hecho de la escrituración misma del contrato de trabajo. El artículo 8 del Código citado indica que la sola existencia de los elementos referidos hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Todo ello lleva a concluir que cada situación debe examinarse como realmente es, sin que pueda verse alterada la realidad por los pactos que han suscrito las partes o por la sola exigencia del cumplimiento de requisitos tributarios ajenos a la relación laboral".

Situación de los trabajadores contratados a honorarios por una Municipalidad.

En primer término, es necesario precisar que el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales Ley N° 18.883, en su Art. 4° , autoriza la contratación bajo esta modalidad de profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas



materias, mediante una resolución de la autoridad correspondiente, siempre y cuando se deban realizar labores accidentales y que no sean las habituales de la institución. La misma disposición en su inciso segundo permite la contratación de personal para la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme las reglas generales.

Finalmente, la norma establece que dichas personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo. Se trataría en consecuencia más bien tal contratación de un arrendamiento de servicios inmateriales, en los términos previstos por la normativa.

No obstante, lo señalado precedentemente, se reconoce la aplicación del Código del Trabajo a las prestaciones de servicios entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, a pesar de realizarse a honorarios, cuando ésta no se ajuste a lo establecido en la ley, en este caso específico a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883 y por su parte se observen los requisitos que el legislador laboral impone para que se entiendan reguladas por el citado código.

En efecto, el cumplimiento de horarios, la recepción de órdenes por parte de superiores y el pago de una remuneración fija mensual permiten concluir que no estamos frente a una labor accidental o específica según lo establecido por el artículo cuatro de la Ley 18.883 aun cuando formalmente así se haya establecido. (Sentencia Excm. Corte Suprema, Rol 11584-2014 de 1 de abril de 2015, Rol 24388-2014 de 9 de julio de 2015, Rol 23647-2014 de 6 de agosto de 2015.) La conclusión anterior no implica desconocer la facultad de la administración para contratar bajo el régimen de honorarios bajo su normativa, cuando necesite de profesionales o técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, siempre que deban realizar labores accidentales, no habituales, o se trate de la prestación de servicios para cometidos específicos. Según esta norma, es requisito esencial para que tenga lugar la contratación a honorarios en la Administración Pública, que las labores a realizar sean accidentales.

Teniendo presente el sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras que prescribe, como regla de interpretación el artículo 20, del Código Civil, la palabra accidental, está definida por la RAE como "1. Adj. No esencial. 2. Adj. casual, contingente. 3. Adj. Dicho de un cargo: Que se desempeñe con carácter previsional". En ningún momento las labores que desempeñé fueron accidentales, sino permanentes. La regla aludida se configura ya que la ley citada precisa y restringe aún más su aplicación al señalar: "y que no sean las habituales de la institución"; y según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra "habitual" significa:" 1. Adj. Que se hace, padece o posee con continuación o por hábito.

Precisamente mis labores eran las habituales de la municipalidad.



El contrato a honorarios se erige como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

Debe entenderse que son labores accidentales y no habituales de la demandada aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos las labores puntuales, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar las labores permanentes conforme dicha modalidad.

En la doctrina laboral se sostiene que los desajustes entre los hechos y las formalidades o apariencias pueden tener su origen, en lo siguiente: a) la intención deliberada de fingir o simular una situación jurídica distinta de la real; b) provenir de un error; c) por falta de actualización de los datos; y d) por falta de cumplimiento de requisitos formales. (Gamonal Contreras, Sergio, Fundamentos de Derecho Laboral, Abeledo Perrot Legal Publishing Chile, Ed. 2011, p. 121). Efecto declarativo de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral. Cabe señalar al respecto, trayendo a colación un fallo reciente de la Excma. Corte Suprema, que rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia deducido en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó lo resuelto por el de primera, que la sentencia que declara la existencia de la relación laboral tiene efecto declarativo. (Rol N° 7.723-2013. Excma. Corte Suprema. caratulados "Espinoza con Televisión Nacional de Chile") Señalan los referidos fallos de primera y segunda instancia: (...) "que al haberse declarado la existencia de la relación laboral se entiende que el empleador debió cumplir con las obligaciones propias de la relación laboral desde el día en que ésta se inicia, por lo tanto, debió cumplir con el pago de remuneraciones, enterar las cotizaciones de seguridad social y otorgar las demás contraprestaciones propias a la ejecución del trabajo convenido, ahora al no haberse pagado íntegramente al momento del término de la relación laboral las cotizaciones de seguridad social de todo el periodo que duró la misma, corresponde acoger la demanda de nulidad del despido, toda vez que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo y acoger respecto del pago de las cotizaciones de seguridad social de todo el periodo que estuvo vigente la relación laboral." (RIT T-527-2012 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago)... "esta Corte discrepa de ese punto de vista desde que se trata de una sentencia declarativa que viene a producir mera certeza respecto del carácter del servicio que el demandante prestó a la demandada, naturaleza que se corresponde con el sello declarativo de la acción -en lo que a la existencia del vínculo laboral se refiere- y que, justamente por ello, se fundamenta en



antecedentes probatorios pretéritos, es decir, aquellos que reproducen en el proceso la realidad habida desde el inicio de la relación".

#### EN CUANTO AL DESPIDO INJUSTIFICADO.

Conforme lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, el empleador al despedir a un trabajador debe comunicarle esta circunstancia por escrito, ordenando la ley que ello se verifique en el plazo de 3 días hábiles contados desde la separación del trabajador, informando además a la Inspección del Trabajo; trámite que hoy se realiza electrónicamente. Mi ex empleador procedió a despedirme entonces, sin expresar causa ni fundamento.

Respecto a la comunicación del despido, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, que ordena enviar o entregar al trabajador una carta de aviso de término de contrato de trabajo indicando la causa legal alegada o que se invoca, los hechos en que se fundamenta y el estado del pago de las cotizaciones de seguridad social devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen.

De esta forma, el empleador dispone de una oportunidad previamente determinada para señalar la causal de despido y los hechos en que se funda, si no lo hace se encontrará privado de invocarlos en un juicio posterior. El propósito del legislador es que el empleador detalle en la carta de despido los hechos - objetivos y concretos - en los que fundamenta su decisión, de manera tal que el trabajador no quede en situación de indefensión y pueda arbitrar su defensa.

La jurisprudencia es reiterada y pacífica en considerar que la omisión de la carta de despido o un relato deficiente no es subsanable durante la secuela del juicio, ya que el objeto de establecer dicha formalidad es que el trabajador no quede en situación de indefensión. La exigencia legal de señalar los hechos en que se funda la causal de despido es de suma relevancia, atendido que, de acuerdo a las reglas del onus probandi, corresponde al empleador acreditar los presupuestos fácticos constitutivos de la causal y dicha prueba sólo podrá recaer en los hechos invocados en la carta de despido. Además, se pretende evitar dejar al trabajador en indefensión.

En este contexto, resulta aplicable la sanción establecida en el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, en virtud del cual la prueba en los juicios de despido recae en quien lo ha generado, y sólo podrá dirigirse a la acreditación de la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, "sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido".

El empleador dispone de una oportunidad previamente determinada para señalar la causal de despido y los hechos en que se funda, si no lo hace se encontrará privado de invocarlos en un juicio posterior, por el contrario, si pudiera invocarlos en su reclamo o contestación, se dejaría al trabajador en la absoluta indefensión, al no tener la posibilidad



de rebatirlos y desvirtuarlos, por no haber sido conocidos con anterioridad. El artículo 168 de Código del Trabajo dispone perentoriamente que: "El Trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161 de Código de Trabajo, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado causal legal alguna, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y de los incisos primero y segundo del artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última, de acuerdo a las siguientes reglas: b) En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado causa legal para dicho término".

El artículo 162 del Código del Ramo señala que el empleador deberá enviar carta certificada al trabajador del despido acompañando comprobantes que acrediten el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, lo que debió realizarse considerando hasta las cotizaciones del mes de junio de 2020, que como he señalado, hasta el día de hoy no he recibido comunicación de su pago.

En consecuencia, corresponde que este tribunal declare y ordene el pago de las prestaciones laborales que se indican:

1. Que la relación de trabajo que hubo entre las partes entre el 1 de octubre del año 2017 y el 1 de junio del año 2020, fue de naturaleza laboral.

2. Que, mi despido fue injustificado, indebido y/o improcedente.

3. Que, por lo antecedentes expuestos, además son nulos o ineficaces los finiquitos suscritos entre las partes, por no haber provocado los efectos liberatorios que perseguían y por no haber dado en la práctica y en la realidad de los hechos término a la relación laboral, al haber seguido prestando los mismos servicios, durante todo el tiempo de forma ininterrumpida y hasta el término de la relación laboral.

4. Que, se condene a la demandada a pagarme las siguientes prestaciones laborales:

A. La Indemnización Sustitutiva por falta de aviso previo por la suma de \$ 1.761.638 o bien o bien la cantidad que estimase procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.

B. Indemnización por años de servicio por la suma de \$ 5.284.914, o bien la cantidad que estimase procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.

C. Feriado legal proporcional correspondiente al periodo 2020, 14 días por la suma de \$ 822.094, o bien la cantidad que estimase procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.



D. Recargo legal de un 50% por la suma de \$ 2.642.457, conforme lo dispone el art.168 del Código del Trabajo o bien la cantidad que estimase procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.

E. Que, se condene a la demandada al pago de las Cotizaciones Previsionales y de seguridad social adeudadas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 1 de junio de 2020.

F. Que, se condena a la demandada a pagarme las sumas antes mencionadas con reajustes e intereses de conformidad a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo.

G. Que, se condene en costas a la demandada en caso de oposición.

Por tanto, y según el mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos,1, 7, 41, 63, 162,168 y siguientes del Código del Trabajo en relación con los Art. 420, 425, 446 y siguientes del mismo cuerpo legal y demás normas aplicables, solicita tener por interpuesta demanda de declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, indebido y/o improcedente y cobro de prestaciones en contra de mi ex empleador la I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, RUT N° 69.240.300-2, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada legal y judicialmente por su Alcalde don RIGOBERTO ALEJANDRO HUALA CANUMAN, RUT N° 9.818.825-2, Ingeniero (e) Administración de Empresas, o por quien corresponda de conformidad a lo establecido en el artículo 4° del Código de Trabajo, ambos domiciliados para estos efectos en calle Francisco Bilbao N° 357, comuna y ciudad de Coyhaique, acogerla en todas sus partes y en definitiva declarar:

1. Que la relación de trabajo que hubo entre las partes entre el 1 de octubre del año 2017 y el 1 de junio del año 2020, fue de naturaleza laboral.

2. Que, mi despido fue injustificado, indebido y/o improcedente.

3. Que, por lo antecedentes expuestos, además son nulos o ineficaces los finiquitos suscritos entre las partes, por no haber provocado los efectos liberatorios que perseguían y por no haber dado en la práctica y en la realidad de los hechos término a la relación laboral, al haber seguido prestando los mismos servicios, durante todo el tiempo de forma ininterrumpida y hasta el término de la relación laboral.

4. Que, se condene a la demandada a pagarme las siguientes prestaciones laborales:

A. La Indemnización Sustitutiva por falta de aviso previo por la suma de \$ 1.761.638.- o bien la cantidad que se estime procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.

B. Indemnización por años de servicio por la suma de \$ 5.284.914, o bien la cantidad que se estime procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.



C. Feriado legal proporcional correspondiente al periodo 2020, 14 días por la suma de \$ 822.094, o bien la cantidad que se estime procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.

D. Recargo legal de un 50% por la suma de \$ 2.642.457, conforme lo dispone el art.168 del Código del Trabajo o bien la cantidad que se estime procedente por dicho concepto conforme a derecho y al mérito del proceso.

E. Que, se condene a la demandada al pago de las Cotizaciones Previsionales y de seguridad social adeudadas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 01 de junio de 2020.

F. Que, se condena a la demandada a pagarme las sumas antes mencionadas con reajustes e intereses de conformidad a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo.

G. Que, se condene en costas a la demandada en caso de oposición.

**SEGUNDO:** Que, la demandada contestando la demanda interpuesta en su contra solicita su rechazo en todas sus partes, fundado en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que pasa a exponer:

#### ANTECEDENTES PRELIMINARES.

Para una mejor comprensión de los argumentos a presentar con posterioridad en esta contestación, resulta ineludible explicar algunos antecedentes previos, que explican la contratación a honorarios que existía entre el municipio y el actor.

Existe un programa en la Municipalidad de Coyhaique que se denomina Proyecto de Generación de Empleo, y que suele conocerse como Programa PMU, por sus siglas correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano, en virtud del cual, se contrata a diversas personas en virtud de contratos de trabajo. Dicho programa permite generar oportunidades y alternativas de empleo, así como también, mejorar las áreas verdes, y cierta infraestructura de nuestra ciudad.

Este programa se financia con recursos del Gobierno Regional de Aysén, GORE Aysén, a través de Convenios de Transferencia FRIL, que se suscriben todos los años, teniendo cada uno de estos distintos convenios, objetivos diferentes, como por ejemplo: mejorar las áreas verdes de un sector, población o parque, o también, mantener y mejorar veredas, miradores o letreros de bienvenida.

Pues bien, es en dicho marco asociado al programa PMU, en que el actor suscribió un contrato de trabajo, cuya vigencia fue desde el 2 de octubre al 30 de Noviembre de 2017, el cual dispone expresamente en su cláusula NOVENA, que es por término de obra definida, y que no se adquiere la calidad de funcionario municipal al ser un programa especial de generación de empleo. Dicho contrato fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 5.882 de 14 de noviembre de 2017, y que está destinado a cubrir un proyecto de generación de empleo PMU, en el marco de los convenios FRIL con el





Gobierno Regional de Aysén (GORE Aysén), y que tiene por objeto, el Mejoramiento de Áreas Verdes de la Población Pablo Neruda, el cual fue Modificado por Decreto Alcaldicio N° 488 de 24 de enero de 2018, en virtud del cual, finalizó su contrato con fecha 31 de enero de 2018, lo que posteriormente fue objeto de su respectivo finiquito con fecha 2 de abril de 2018.

Luego, en virtud de un nuevo proyecto, en el marco de un nuevo convenio de transferencia suscrito en Gobierno Regional de Aysén, se suscribió un contrato de trabajo, también por obra o faena, entre el 15 de marzo al 15 de septiembre de 2018, el cual contempla también en su cláusula NOVENA, que no se adquiere la calidad de funcionario municipal, al tratarse de un programa especial de generación de empleo, y que fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2261 de 24 de abril de 2018, para un proyecto FRIL distinto al anterior, este es: "Restauración de Invernaderos Vivero Municipal de Coyhaique". Este contrato fue objeto de finiquito, con fecha 14 de septiembre de 2018.

Finalmente, en virtud de Decreto Alcaldicio N° 6955 de 11 de diciembre de 2018, se aprueba contrato de trabajo por obra o faena, también en el marco de los programas especiales de generación de empleo, también conocidos como programa PMU, para otro proyecto, en virtud de otro convenio suscrito con el Gobierno Regional de Aysén GORE, esta vez, para el proyecto: "Mejoramiento Áreas Verdes Sector Sur de la Comuna de Coyhaique", con una vigencia entre el 20 de septiembre de 2018 al 8 de octubre de 2018. El cual fue modificado por Decreto Alcaldicio N° 6932 de 10 de diciembre de 2018, ampliando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Este contrato fue objeto de finiquito con fecha 2 de enero de 2019.

En conformidad a estos contratos de trabajo, el señor Bulnes, fue contratado como "apoyo administrativo de rendiciones de proyectos FRIL", pero posteriormente, no fue más contratado en los Programas Especiales de Generación de Empleo PMU, en el marco de los convenios suscritos con el Gobierno Regional de Aysén, finalizando sus labores en dichos programas, sin retornar a ello, y siempre habiéndose suscrito los respectivos finiquitos.

En el año 2019, surge la necesidad en la Secretaría Municipal de Planificación SECPLAC, de contratar servicios de consultoría, para efectos de elaborar Proyectos de Inversión, para la posterior realización de Obras de Desarrollo Local, por lo que se destinan recursos provenientes de la Ley 19.995 o también llamada Ley de Casinos, a la cuenta de Proyectos de Inversión.

En virtud de dicha cuenta, y en conformidad al D.S. 854/2004 de Hacienda, las Municipalidades se encuentran facultadas para contratar asesores y consultores a Honorarios, para efectos de elaborar proyectos de inversión, como serían proyectos para la construcción de obras de desarrollo.



Es por ello, que en virtud del Decreto Alcaldicio N° 530 de 23 de enero de 2019, se contrata al Sr. Pablo Bulnes Pardo, en virtud de un Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, para efectos de Elaborar Perfiles de Proyectos de Inversión, Elaborar Proyectos SUBDERE, y bajo metodología circular 33, y rendición de proyectos de infraestructura FRIL y SUBDERE.

El presente año 2020, surge la necesidad de contar con la Elaboración de un Proyecto de Inversión, que se traducirá en una obra de desarrollo, consistente en el futuro Mercado Municipal, importante obra en beneficio de nuestra ciudad, y que fue encargada al demandante en virtud de un nuevo contrato de prestación de servicios a honorarios, el cual fue aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 155 de 10 de enero de 2020, el cual fue imputado a la cuenta presupuestaria: 215.31.02.002.001, denominada "Estudios y Asesoría para Iniciativas de Inversión", y que contempla en su cláusula tercera como servicios a contratar: "Elaboración de proyecto Diseño de Mercado Municipal de Coyhaique, Elaboración de perfiles de proyectos de inversión FNDR, Elaboración de Proyectos bajo metodología Circular 33, y rendiciones Proyectos FRIL".

Como ya se ha venido diciendo, la cuenta presupuestaria a la que se imputa el contrato, se financia con ingresos que el municipio percibe a través de los impuestos que la ley de Casinos destina en favor de los municipios, para la elaboración de obras de desarrollo local. Desafortunadamente, a consecuencia del brote del virus COVID19, el municipio ha sufrido una merma importante en sus recursos, precisamente, aquella que proviene de la actividad del Casino, el cual, como es de público conocimiento, no se encuentra operativo, por las estrictas medidas ordenadas por la autoridad sanitaria, para efectos de detener la propagación del letal virus.

Es entonces consecuencia inmediata de este contexto, que la cuenta a la que se imputan las diversas contrataciones para el desarrollo de proyectos de inversión, se vea mermada considerablemente en sus ingresos, lo que ha forzado a la administración municipal, a poner término anticipado al contrato de prestación de servicios a honorarios del demandante.

Es por ello que a través de correo electrónico, toda vez que el Municipio se encuentra además en modalidad de teletrabajo, se informó al Señor Bulnes que conforme al Decreto Alcaldicio N° 2.228 de 2020, se ponía término a su contrato de prestación de servicios a honorarios.

#### FUNDAMENTOS DE HECHO

II.1. El demandante expone sus fundamentos de hecho con errores, omisiones e imprecisiones o hechos que lisa y llanamente no son ciertos.

Esta parte viene en controvertir, todos y cada uno de los fundamentos de hecho expuestos por el demandante, en ese sentido venimos en exponer lo que sigue:



El demandante fue contratado en virtud de un Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, para efectos de realizar servicio de consultoría para el Diseño y ejecución de proyectos, para la posterior elaboración de proyectos relacionados con Obras de Desarrollo local.

El contrato fue aprobado a través del Decreto Alcaldicio N° 155 de 10 de enero de 2020, el cual fue imputado a la cuenta presupuestaria: 215.31.02.002.001, denominada "Estudios y Asesoría para Iniciativas de Inversión". Desde ya podrá comprobar entonces, que varias de las aseveraciones efectuadas por el demandante en su libelo, no resultan ciertas.

En efecto, postula en su libelo que en los Contratos de Trabajo suscritos en el período comprendido entre el 01 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, serían para las mismas funciones por las que fue contratado, en virtud del contrato de prestación de servicios a Honorarios, que usa como fundamento de la demanda, sin embargo, de la sola lectura de los mismos, se comprueba que lo sostenido por el demandante no es cierto.

Los contratos de trabajo citados por el actor, obligan al demandante a servir de "Administrativo apoyo de rendiciones", es decir, conforme a los mismos, sirve de apoyo en los procesos de rendición de proyectos emanados de convenios suscritos con el gobierno regional GORE, para el Programa de Mejoramiento de Empleo PMU. Mientras que en el contrato de prestación de Servicios a Honorarios, en su cláusula TERCERA, estipula que la contratación del demandante fue efectuada para la: "Elaboración de proyecto Diseño de Mercado Municipal de Coyhaique, Elaboración de perfiles de proyectos de inversión FNDR, Elaboración de Proyectos bajo metodología Circular 33, y rendiciones Proyectos FRIL".

Como podrá ver se desmiente totalmente, lo postulado por el demandante acerca de que eran las mismas funciones. En efecto, no realizaba las mismas funciones como lo ha postulado. Sino que se trata de dos historias inconexas y absolutamente disímiles entre sí, una en el marco de los programas PMU y otra, como consultor a honorarios para la elaboración de proyectos de inversión, a través de la SECPLAC.

Por otra parte, el término de contrato de prestación de servicios a honorarios, no resulta en absoluto injustificado como lo sostiene en su demanda, sino por el contrario, y como se demostrará en la instancia procesal correspondiente, el decreto N° 2228 de 29 de mayo de 2020, que pone término al contrato de prestación de servicios a honorarios, se encuentra muy bien fundado, reproduciendo incluso, el texto y contenido íntegro de los informes de finanzas y Secplac, que acreditan el desfinanciamiento que sufre el municipio por la merma de ingresos provenientes de la ley de casinos.

En otro orden de ideas, esta parte niega tajantemente el haber "impuesto" la firma de finiquitos como lo expone el demandante, los que además no son nulos, por cuanto



cumplen con todos los requisitos legales, los que fueron firmados libremente por parte del demandante, sin ningún tipo de imposición como lo quiere hacer ver en su demanda.

También se niega absolutamente el haber "impuesto" contratos a honorarios para disfrazar contratos de trabajo, como lo ha declarado en su demanda. Como ya se ha indicado y probará en la instancia correspondiente, la realidad contractual que tuvo el demandante en el programa PMU, es total y absolutamente inconexa con la contratación como consultor, tanto en funciones, labores, responsabilidades y obligaciones, imputaciones presupuestarias y convenios de respaldo.

El demandante también indica, que se le ha impuesto la obligación de imprimir boleta de honorarios, sin embargo, ello es una obligación que tienen todos los prestadores de servicios a honorarios, al igual que la presentación de informes de funciones, lo cual no constituye en absoluto una conversión del contrato en contrato de trabajo. A la hora de pagar los honorarios del consultor, se requiere de justificar el gasto del municipio, con las respectivas boletas e informes de cumplimiento, al tratarse de recursos públicos.

Por cierto, el demandante, nunca realizó exposiciones en representación del Alcalde. El consultor en su calidad de tal, debe exponer los proyectos que se encuentra elaborando, lo que es inherente a sus funciones, pero eso no significa, que se convierta inmediatamente en "representante" del jefe del servicio, expresión incorrecta, y que no corresponde a la realidad.

Asimismo, sostiene como argumento que se encontraba sujeto a la probidad administrativa, sin embargo, esta rige respecto de todos los prestadores de servicios a honorarios, lo que no convierte sus contratos en contratos de trabajo.

II.2. Se controvierten las consecuencias jurídicas de los hechos indicados por el demandante.

Asimismo, esta parte además de controvertir la versión de los hechos en que se funda la demanda, también controvierte las consecuencias jurídicas de los mismos, en efecto se controvierte:

1. Que exista algún vínculo laboral entre el Municipio y el actor o haya existido alguno, que se rija en conformidad al Código del Trabajo, en efecto, no existe ni ha existido contrato de trabajo alguno.

2. Que se hayan pagado remuneraciones y que en conformidad al contrato suscrito entre las partes, el municipio se haya obligado a pagar remuneraciones, como consecuencia de lo dispuesto en el art. 162 del Código del Trabajo.

3. Que el municipio se haya obligado a pagar cotizaciones previsionales, y que en consecuencia actualmente adeudare algún monto por dicho concepto.

4. Que se haya despedido injustificadamente al actor, lo cual se niega tajantemente.



Atendidos estos hechos controvertidos, pesará sobre la demandante la carga de probar los hechos planteados en su demanda, así como también la existencia de su presunta, inexistente y controvertida vinculación de carácter laboral con la municipalidad, comenzando por acreditar la existencia de un contrato regido por el Código del Trabajo, lo cual se niega por esta parte demandada rotundamente.

#### EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL TRIBUNAL.

Esta parte viene en alegar la Incompetencia absoluta del Tribunal para conocer la presente causa, sobre la base de los siguientes argumentos:

En efecto, jamás ha existido entre las partes una relación de trabajo sujeta a la regulación del Código del Trabajo, sino que existe un contrato de prestación de servicios a honorarios, cuya celebración ha sido habilitada expresamente por el ordenamiento jurídico. Por otra parte, existe una posibilidad aun más reducida y excepcional en el ordenamiento, para efectos de que el municipio pueda contratar conforme al referido Código del Trabajo, tipo de contratación que se niega tajantemente haya existido en el presente caso.

A partir de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en los artículos 432 y 452 del mismo cuerpo legal, el presente Tribunal de Justicia es incompetente para conocer de la presente controversia.

Como podrá comprobar el contrato suscrito entre el municipio y el actor, corresponde a un contrato de prestación de servicios a honorarios, imputado a las cuentas presupuestarias habilitadas conforme al Decreto N° 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y que en definitiva se rige por las propias disposiciones del Código Civil, precisamente conforme a los artículos 2006 y siguientes del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, el estatuto rector es el mismo contrato en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil. En el presente caso, el contrato celebrado entre la Municipalidad con don Pablo Bulnes Pardo, no dice relación con la gestión interna municipal, sino con una labor específica, de consultoría para la elaboración de proyectos destinados a obras de desarrollo y que la administración realiza con cargo a una cuenta especialmente creada para tal efecto.

Asimismo, el municipio al encontrarse habilitado para suscribir el respectivo contrato a honorarios, ha cumplido con el principio de juridicidad que le rige conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, normas en virtud de las cuales, la Municipalidad no puede realizar contrataciones a través de Contrato de Trabajo, sino únicamente en las situaciones que la ley lo faculta expresamente para ello, y que en el caso de las Municipalidades, corresponden a los supuestos contemplados en el artículo 3 de la ley 18.883, no encontrándose la demandante en ninguna de las hipótesis contemplados por esta norma.

En consecuencia, la acción ordinaria laboral deducida en estos autos, no es la vía judicial aplicable al caso del actor, toda vez que se encuentra sujeta a las normas del



sector público, las que en el presente caso reenvían su regulación a las normas del Código Civil y no al Código del Trabajo, por lo que no resulta en definitiva aplicable el régimen de: "Terminación en el Contrato de Trabajo y estabilidad en el empleo", contemplado en para los Trabajadores del sector privado y que se regulan en los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo.

Por tanto, pedimos respetuosamente a acoger la presente Excepción de Incompetencia Absoluta del Tribunal, disponiendo que el demandante ocurra ante el tribunal que resulte competente.

EN SUBSIDIO DE LA EXCEPCIÓN FORMULADA: NO EXISTE CONTRATO DE TRABAJO. EL DEMANDANTE FUE CONTRATADO CONFORME A UN CONTRATO A HONORARIOS ENTRE LAS PARTES EN CONFORMIDAD A LA LEY.

Sobre el Contrato de Servicios a honorarios suscrito entre el municipio y el actor, y su procedencia.

Como ya se ha venido diciendo, el vínculo contractual entre la demandante y el Municipio, corresponde a un Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, el cual se da en el marco de la habilitación presupuestaria que el legislador ha contemplado para las municipalidades, contenido en el D.S.854 de 2004 del Ministerio de Hacienda, el cual contempla el denominado Clasificador de ingresos y gastos, el cual clasifica al subtítulo 31 como "Iniciativas de Inversión", con la asignación N° 02 denominado "proyectos", y 002 "Consultorías".

Como podrá ver tanto en la cláusula SEXTA del Contrato de prestación de servicios a Honorarios, como también en el Número 3° del Decreto Alcaldicio N° 155 de 10 de enero de 2020 que aprueba el mismo, se imputa el gasto por los honorarios a la cuenta: 215.31.02.002.001, denominada "Estudios y Asesoría para Iniciativas de Inversión".

A partir de lo anterior entonces, es menester considerar cuáles son las funciones para las que fue contratado el demandante, en virtud de lo estipulado en la cláusula tercera de su contrato de prestación de servicios a honorarios, dentro de las cuales se encuentran, "Elaboración de proyecto Diseño de Mercado Municipal de Coyhaique, Elaboración de perfiles de proyectos de inversión FNDR, Elaboración de Proyectos bajo metodología Circular 33, y rendiciones Proyectos FRIL".

Es decir, la contratación se ha realizado para efectos de contar con los servicios de consultoría, consistentes en la "Elaboración de Proyectos", como es, para realizar el futuro Mercado Municipal, importante Obra de Desarrollo proyectada para el beneficio de nuestra Comuna de Coyhaique.

Como podrá comprobar entonces el Municipio se encontraba plenamente facultado para suscribir el presente contrato de prestación de servicios a Honorarios, en conformidad al D.S. N° 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que habilita al Municipio para realizar contratos de consultoría para el diseño de proyectos, como es el caso del demandante.



1. Sobre el Origen y Merma de los recursos de la cuenta presupuestaria.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior y como se demostrará en la etapa procesal correspondiente, la cuenta 215.31.02.002.001 a la que se imputa el contrato de prestación de servicios a honorarios, recibe fondos principalmente provenientes de la denominada "Ley de Casinos", donde encuentra su fuente de financiamiento.

Al respecto, es menester hacer presente que conforme a la ley 19.995, que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, la cual en su artículo 60 dispone:

"Los recursos que se recauden por aplicación del impuesto establecido en el artículo anterior se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un 50% se incorporará al patrimonio de la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, para ser aplicado por la autoridad comunal al financiamiento de obras de desarrollo."

Al respecto, cobra especial relevancia lo que en relación con esta disposición ha sostenido la Contraloría General de la República en Dictamen N° 50.001 de 2010, el que resuelve:

"Por otra parte, es del caso expresar que los dictámenes N° s 976 y 65.765, ambos de 2009, entre otros, han manifestado que la expresión "obras de desarrollo" comprende no sólo las obras materiales, sino también los servicios y acciones que ejecuten los municipios en favor de los habitantes de la comuna, dentro del ámbito de su competencia, precisando que estas obras, servicios y acciones deben satisfacer de modo directo e inmediato una necesidad o interés de la población comunal, lo que concuerda con el artículo 1° de la enunciada Ley N° 18.695, en cuanto prevé que la finalidad de dichas entidades es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, agregando esos pronunciamientos que "corresponde a los propios municipios determinar las obras de desarrollo a las que deben destinarse los recursos que perciban por aplicación del artículo 60, letra a), de la Ley N° 19.995, precisando que la única limitación al respecto, es que tales obras tengan por objeto exclusivo dar satisfacción a una necesidad o interés de la comunidad local".

En cuanto a la consulta específica formulada en la especie, relativa a si se encuentran en dicha situación "un diseño para un proyecto, una base de diseño o un banco de diseños de un municipio", esta Contraloría General concuerda con la opinión manifestada por el diputado señor Rincón González, en el sentido que tales labores pueden ser financiadas con los fondos de que se trata, siempre que se vinculen con la ejecución de tareas que guarden afinidad con los objetivos establecidos en el artículo 60 de la ley N° 19.995 para el impuesto de afectación ya mencionado, es decir, que estén destinadas a la ejecución de obras orientadas al desarrollo comunal."



Como ya hemos sostenido anteriormente, la contratación del señor Bulnes, se ha realizado para que prestara servicios para la "elaboración de proyectos", conforme a lo estipulado en su contrato, para realizar obras de desarrollo, como por ejemplo, el Mercado Municipal. De ese modo, queda plenamente justificada la contratación de prestación de servicios a honorarios por parte del municipio.

Es menester agregar además, que como consecuencia de la contingencia derivada del brote de COVID19 y de las medidas adoptadas para evitar su propagación, el municipio dejó de percibir recursos provenientes de los Casinos de Juegos de la Ciudad. Corrobora esta situación el Ord. N° 612 de fecha 24 de abril de 2020 de la Superintendencia de Casinos de Juegos, que informa a los municipios, entre ellos Coyhaique, que a consecuencia del cierre de los locales no se recibirán los recursos generados por concepto de impuesto específico.

En efecto, como es ya de público conocimiento, las medidas adoptadas por la Autoridad Sanitaria, contemplaron el cierre y prohibición de Casinos y lugares de aglomeración de personas, por lo que dicho local, al no obtener ingresos, tampoco genera impuestos en favor del Municipio, mermando de manera importante sus recursos financieros, lo que ha forzado a poner término anticipado al Contrato del Demandante, el cual si bien se encuentra imputado a la cuenta de proyectos de inversión, al tratarse de consultorías para la elaboración de proyectos que involucran obras de desarrollo, los fondos con los que se financiaba dicha cuenta, han disminuido ostensiblemente, por lo que ya no podía mantenerse su contratación de prestación de servicios a Honorarios.

Con todo esto además, queda claro que las tareas efectuadas por la demandante, no correspondían a una Gestión Administrativa Interna de la Municipalidad, sino que corresponden a una labor de consultoría en el marco de elaboración de proyectos, para efectos de realizar obras de desarrollo que se financian con la Ley de Casinos.

En consecuencia, no resulta procedente la aplicación de la contra excepción prevista en el inciso 3° del Código del Trabajo, y tampoco se está en presencia de una labor efectuada bajo dependencia y subordinación, que haya debido ser constituida como "planta" o "contrata", no regulada en el estatuto administrativo.

No existe despido carente de causal.

Atendido lo expuesto, es menester afirmar que el demandante nunca fue despedido, y lo que ha acontecido, más bien corresponde a un término de contrato de honorarios conforme a las causales estipuladas en el mismo. En efecto, como se demostrará, las partes regularon en el contrato, la posibilidad de poner término anticipado al mismo en sus cláusulas.

No existe Contrato de Trabajo por el hecho de existir Derechos estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios.





El demandante afirma en su acción que mantiene un vínculo laboral con la municipalidad, regido por el Código del Trabajo, toda vez que tendría una serie de derechos y beneficios propios de dicho tipo de contrato, así como también, porque conforme al contrato se han establecido una serie de obligaciones que en su opinión revisten una relación de subordinación y dependencia. Sin embargo, ello no resulta efectivo, puesto que la relación derivada de un contrato de prestación de Servicios a Honorarios, no se transforma en una regida por el Código del Trabajo por el sólo hecho de establecer derechos en su favor.

En ese sentido, en fallo dictado en Sentencia de causa rol N° 19-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, el máximo tribunal regional resuelve:

"SEXTO: Que, de la manera que se señaló, la circunstancia que en los contratos a honorarios se establezca jornadas de trabajo y la obligación del prestador de cumplir con las instrucciones que decreta la autoridad administrativa, como así también el establecimiento de otros derechos aplicables a los funcionarios públicos, no significa que por ello se cambie, transforme o mute la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios en uno regido por el Código del Trabajo. De este modo, no cabe sino determinar que el contrato de prestación de servicios o a honorarios que fuera celebrado por las partes, constituye y configura un estatuto especial y no necesariamente, como lo señaló el Juez de la instancia, significa la existencia de una relación laboral, regida por el Código del Trabajo, por lo que no cabe sino concluir que al haberlo así estimado el Juez y en base a ello condenar a una de las partes contratantes al pago de diversas prestaciones que emanan de las normas de dicho Código, en especial los artículos 1, 7, 8 y 162, en circunstancias que dichas normas no eran aplicables al caso que se conoce, constituyen una situación errónea y de infracción de ley, lo que debe ser enmendado, considerando, además, que se constata la existencia de un contrato que fuera libremente convenido entre las partes y que se encuentra contenido en un estatuto especial, lo que hace aplicable también lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, que dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes."

Luego, termina resolviendo en su considerando Noveno:

"Que, de este modo, aparece claro y de manifiesto que no es factible, como lo hizo el Juez del grado, haber calificado una relación de prestación de servicios como si fuera laboral y regida por el Código del Trabajo, en circunstancias que entre las partes medió un contrato a honorarios, administrativo, sin que la demandante tenga derecho al pago de indemnizaciones de índole laboral y previsionales, por lo que no cabe sino desestimar la demanda planteada por la actora y así debe declararse..."()

Es decir, no por el hecho de que se hayan pactado derechos a favor del prestador de servicios a honorarios, el contrato se torna en un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo. Aceptar una tesis contraria, involucraría que todos y cada uno



de los funcionarios públicos de planta o contrata que integran la administración del estado, mantendrían contratos de trabajo regidos por el Código del Trabajo, por el sólo hecho de contar con una serie de derechos, o por el hecho de poder gozar de feriado, o por recibir instrucciones por parte de su superior jerárquico y en definitiva tener que acatarlas. Sin embargo ello no ocurre, y en el presente caso, la existencia de instrucciones por parte de la unidad técnica, responde a la necesidad de contar correctamente con el servicio contratado a honorarios, el cual involucra recursos públicos, por lo que debe ser permanentemente monitoreado y sujeto a control interno de la administración, para efectos de garantizar que los recursos se gasten correctamente y se cumpla el servicio contratado.

Lo mismo ocurre con la obligación de cumplir un horario, en efecto, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, ha resuelto en su dictamen N° 33.224 de 2019:

"Enseguida, es dable aclarar que no resulta imperativo que los contratos a honorarios fijen una determinada jornada de trabajo o un horario de trabajo, siendo dicha cláusula solo una posibilidad o alternativa de la modalidad de la prestación de los servicios que deberá adoptarse dependiendo de las labores contratadas y que en nada altera la naturaleza jurídica de estas (aplica criterio contenido en los dictámenes Nros. 68.222, de 2012; 68.135, de 2013 y 74.674, de 2015).

Sin perjuicio de lo anterior, es útil destacar que los dictámenes N° s. 62.826, de 2004 y 7.266 de 2005, han señalado que cuando el contrato a honorarios impone al contratante la obligación de cumplir una determinada jornada de trabajo, el servicio respectivo deberá fijar un mecanismo de control de asistencia, cuyo cumplimiento será obligatorio para el contratante, pudiendo, en caso de atrasos o inasistencias injustificadas, practicar los descuentos de remuneraciones correspondientes, conforme al procedimiento establecido al efecto.

Enseguida, cabe recordar que conforme con la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 18.433, de 2018, si bien los contratados a honorarios no se rigen por el Estatuto Administrativo, es posible concederles análogos derechos o beneficios que los establecidos para los servidores a quienes sí se les aplica ese texto legal, en la medida que ellos se hayan acordado en el respectivo contrato y se cumplan las mismas condiciones y requisitos exigidos para que los funcionarios públicos los impetren".

Es decir, conforme a este dictamen vinculante para la administración del estado, el municipio se encuentra habilitado para exigir horarios a los contratados a honorarios, y en el caso de hacerlo, debe exigirle el cumplimiento de dichos horarios. Asimismo, puede perfectamente otorgarle Derechos análogos o beneficios que tengan los demás servidores a planta y contrata, pero no por ello, ni por la fijación de horarios, se muta su calidad contractual o se altera su naturaleza jurídica.



En definitiva, conforme tanto a la jurisprudencia Administrativa, como jurisdiccional, los Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios, pueden perfectamente contemplar horarios, obligaciones, ajustarse a las instrucciones de una unidad técnica y contemplar Derechos a favor del prestador de servicios, sin que por ello, muten o se transformen en su naturaleza, y no pasan a ser Contratos de Trabajo Regidos por el Código del Trabajo.

SI BIEN, EL DEMANDANTE. NO HA ALEGADO LA NULIDAD DEL DESPIDO, DICHA ACCIÓN TAMPOCO SERÍA PROCEDENTE POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

El Contrato corresponde a un contrato a Honorarios.

En consecuencia, al no existir Contrato de Trabajo alguno, la Municipalidad no se encontraba obligada a descontar de los honorarios pagados, suma alguna para realizar el pago de Cotizaciones de Seguridad Social, a lo que se suma que el Contrato de Prestación de Servicios a honorarios, no contempló cláusula alguna que dispusiera la obligación de pagar dichos conceptos o que se obligara a afiliarse a algún sistema de seguridad social. En definitiva, la acción de nulidad resulta absolutamente improcedente y debe ser rechazada.

Es imposible convalidar.

Resulta imposible realizar la convalidación del contrato, toda vez que se trata de contratos de prestación de servicios suscritos conforme al amparo legal, que autoriza a la Municipalidad a suscribir contratos a honorarios, por lo que no se encuentra en el presupuesto establecido por el legislador para que proceda la nulidad del despido.

Adicionalmente, los Órganos de la Administración del Estado, carecen de las facultades legales para convalidar libremente el despido cuando lo estimen, lo que los obliga a requerir de un procedimiento judicial condenatorio, y de ese modo se grava de manera desigual a los entes públicos.

En ese mismo sentido, de acuerdo a la Jurisprudencia contenida en fallo dictado en causa rol N° 41.760-2017, la Corte Suprema de Justicia en su considerando décimo noveno ha resuelto:

"Por otro lado, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 ya mencionado, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto



legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor."

No concurren los presupuestos fácticos exigidos por el legislador para efectos de que proceda la acción de Nulidad de despido.

No resulta aplicable la disposición del artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, ya que dicha hipótesis corresponde al caso en que el empleador ha efectuado las respectivas retenciones de cotizaciones de seguridad social, para posteriormente no realizar su pago o transferencia a las entidades administradoras de la misma. Sin embargo, en el presente caso no, dicha situación no se configura, ni resulta aplicable la regulación del Código del Trabajo para esa situación de hecho, si no se ha realizado descuento alguno por dicho concepto. Como no se ha efectuado descuento alguno, no se produce la causal de nulidad del despido contemplada por el legislador.

#### Enriquecimiento sin causa

En el evento de que se acogiera la acción de nulidad del despido, se produciría como consecuencia una situación de enriquecimiento sin causa, esto es, que se produce el enriquecimiento de un patrimonio, en desmedro de otro que se empobrece, sin existir una causa justificada, toda vez que ya se ha realizado el pago íntegro de los honorarios a la demandante, por concepto del servicio. A dichos honorarios, fue descontado el porcentaje establecido por el legislador para el Impuesto a la Renta de segunda categoría, es decir, el 10% del Honorario íntegramente pagado. Ahora bien, al regirse el contrato en conformidad a lo dispuesto en el contrato y o regulado en el Código Civil al ser un contrato de prestación de servicios a honorarios, si se pagaran cotizaciones, sin haberse obligado a ello en el contrato, se estarían pagando montos sin existir una causa que lo justificar, produciéndose un enriquecimiento sin causa. A lo anterior se suma, que las cotizaciones previsionales son de cargo del trabajador y no del empleador, por lo que se entiendan cubiertos por los honorarios ya pagados.

Por otra parte, resulta ineludible considerar lo dispuesto en DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, el cual regula el contrato de prestación de servicios de salud. En virtud de dicha norma, las instituciones de salud financian prestaciones y servicios de salud, por un lado, y por otro, el cotizante, en caso que sea voluntario o independiente, está obligado a pagar su plan de salud, y se podrá poner término al contrato por parte de la institución de salud, en el caso de que el cotizante no realice el pago de la cotización.

Ahora bien, en el evento de que se realizara el pago de las cotizaciones por parte de la municipalidad, se haría respecto de un período ya concluido, sin que FONASA o la ISAPRE a la que eventualmente se encuentre afiliada la demandante, hayan prestado la prestación de salud que les corresponde, ni tampoco existiría a esta altura la posibilidad de prestarlos, por la cotización a recibir, por lo que en el evento de que el estado resultara condenado a pagarlas, se produciría un empobrecimiento del patrimonio municipal sin



justificación ni causa suficiente alguna, ya que no existe contrato de prestación de salud alguno, por lo que se produciría un enriquecimiento sin causa. Además, en el evento de que el actor sea cotizante voluntario de salud, ante lo cual las entidades de salud recibirían un pago doble.

En definitiva, por estos argumentos, y al no existir un contrato de trabajo, se pide respetuosamente rechazar íntegramente la acción de Nulidad de Despido.

EL DEMANDANTE NUNCA RECLAMÓ LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS A HONORARIOS SUCEIVOS.

El demandante ha suscrito contratos de prestación de servicios a honorarios, de manera sucesiva, cada vez que se necesitó de la Elaboración de nuevos proyectos de Inversión, sin manifestar reparo alguno por las estipulaciones del mismo, por lo que resulta inaceptable, que hoy desconozca el régimen y estatuto que le rige, en la relación contractual con el municipio, el cual en todo momento fue claro en sus disposiciones contractuales, de que se trataba de un Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, para la realización de asesoría y consultaría, para la elaboración de proyectos de inversión, para la realización de obras de desarrollo local. Por lo que a partir de las exigencias de la buena fe, y de los principios que emanan de ella, respecto de los cuales la legislación laboral no es ajena, la actora no puede desentenderse de las estipulaciones contractuales absolutamente claras, estipuladas y conocidas en el Contrato de Prestación de Servicios a honorarios, para venir a alegar una inexistente relación laboral supuestamente regida por el Código del Trabajo, lo cual se niega tajantemente.

NO PROCEDEN LAS PRESTACIONES PECUNIARIAS DEMANDADAS.

Conforme a todo lo expuesto en esta contestación, no corresponde conceder a la contraria, ninguna de las prestaciones pecuniarias demandadas, toda vez que la vinculación con la Municipalidad tiene una naturaleza jurídica, que no permite declarar la nulidad de su cese en la prestación de servicios a honorarios, como también, al no existir un vínculo de subordinación y dependencia, no existió despido de ningún tipo, por lo que tampoco puede prosperar una acción de despido injustificado.

Las indemnizaciones y el pago de Cotizaciones previsionales perseguidas por su demanda, son más bien propias de un contrato de trabajo, y en consecuencia, absolutamente improcedentes en el presente caso, donde la relación contractual es de carácter civil, al tratarse de un contrato de prestación de Servicios a Honorarios, autorizado por el ordenamiento jurídico, y que se rige por el Código Civil, y no por el Código del Trabajo.

En definitiva, no corresponde conceder ninguna de las prestaciones pecuniarias demandadas, al no existir un contrato de trabajo, ni contemplar el contrato de prestación de servicios a honorarios, ninguna cláusula que contemple el pago de alguna de las sumas demandadas.



Por tanto, en virtud de lo expuesto, y lo dispuesto en los arts. 452 y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas pertinentes, pide tener por contestada la demanda interpuesta en contra de mi representada la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

**TERCERO:** Que, llamadas las partes a conciliación esta no se produce.

Se fijaron los siguientes hechos a probar:

1. Existencia de relación laboral entre las partes en los términos del artículo séptimo del Código del Trabajo.
2. Circunstancias del término de los servicios prestados por el actor, causal invocada y hechos en que se funda.
3. Fecha de inicio y de término de esta relación.
4. Eficacia de los finiquitos suscritos por las partes.
5. En su caso, remuneración percibida por el actor.

**CUARTO:** Que, se hace presente que en la audiencia preparatoria de juicio, el Tribunal resolvió el rechazo de la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la parte demandada, con los argumentos allí esgrimidos.

**QUINTO:** Que, llamadas las partes a conciliación esta no se produce.

Se fijaron los siguientes hechos a probar:

1. Existencia de relación laboral entre las partes en los términos del artículo séptimo del Código del Trabajo.
2. Circunstancias del término de los servicios prestados por el actor, causal invocada y hechos en que se funda.
3. Fecha de inicio y de término de esta relación.
4. Eficacia de los finiquitos suscritos por las partes.
5. En su caso, remuneración percibida por el actor.

**SEXTO:** Que la parte demandante en apoyo a sus pretensiones rindió la siguiente prueba:

**DOCUMENTAL:**

- 1.- WhatsApp del DIRECTOR SECPLAC donde solicita al demandante Cartera de Inversiones AÑO 2019, de fecha 18.03.2019.
- 2.- Publicación en la red social Facebook donde figura la Participación del demandante en Operativo de limpieza sector Mirador Río Simpson, en representación del Municipio de Coyhaique, de fecha 30.03.2019.
- 3.- Correo electrónico del jefe de gabinete de la municipalidad de Coyhaique donde, instruye al demandante a participar en reunión de Comité Operativo de Biodiversidad en representación del municipio de Coyhaique, de fecha 01.04.2019.



4.- Publicación en la red social Facebook donde figura el demandante participando en reunión de REVISIÓN DE INICIATIVAS CON PROFESIONALES SUBDERE, en representación del municipio de Coyhaique junto al alcalde, de fecha 24.04.2019.

5.- WhatsApp Municipal del Sr. Camilo Gutiérrez, periodista donde solicita información al demandante referente a cartera de proyectos, con fecha 25.04.2019.

6.- Elaboración de Master Plan en materia de prevención del delito, formulado por el demandante PABLO BULNES PARDO.

7.- Trabajo practico final denominado, espacios urbanos seguros en población César Gerardo Vielmo, de fecha 20 de junio de 2019, elaborado por el demandante.

8.- Correo electrónico del director de Secplac donde solicita al demandante participar en representación del municipio en sesión de la mesa de descontaminación de Coyhaique, de fecha 12.06.2019.

9.- Correo electrónico de Ana Sandoval, donde solicita al demandante participar en representación del municipio en la exposición que realizará un equipo del Ministerio de Energía "Construcción de un Plan de Transición de Calefacción Sostenible para la Región de Aysén" de fecha 26.07.2019.

10.- Correo electrónico del director de Secplac, donde informa que el Sr. Alcalde solicita la participación y exposición del demandante en el COSOC de descontaminación de fecha 24.06.2019.

11.- Publicación en red social Facebook, donde consta la participación del demandante en representación del municipio en encuentro ciudadano sobre MEDICIÓN de la CONTAMINACIÓN. De fecha 22.07.2019.

12.- Publicación en red social Facebook, donde consta la ponencia del demandante en representación del municipio en reunión de vecinos sobre descontaminación con fecha 01.08.2019.

13.- Correo electrónico del director de Serplac donde solicita al demandante participar en representación del municipio en sesión de la mesa de descontaminación atmosférica y comisión de la leña, de fecha 29.11.2018.

14.- Correo electrónico de Carla Albornoz encargada de Departamento de Recursos humanos del municipio, por medio del cual, notifica el término de contrato del demandante de fecha 01.06.2020.

15.- Decreto Alcaldicio N° 2228, de fecha 29 de mayo de 2020, del municipio de Coyhaique, que pone término al contrato del demandante.

16.- Decreto Alcaldicio N° 155, de fecha 10 de enero de 2020, del municipio de Coyhaique, que aprueba contrato del demandante a contar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

17.- Registro de asistencia del demandante de los meses de enero de 2019 a marzo de 2020.



### CONFESIONAL:

Previamente y bajo promesa de decir verdad comparece a absolver posiciones don **Orlando Augusto Alvarado Díaz**, Rut N° 12.447.993-2, geógrafo, domiciliado en calle Emperador Guillermo N° 797, Coyhaique, quien, en resumen, dice que conoce al actor, desde hace 4 años, estaba contratado en la municipalidad, suplencia o contrata, cumplía funciones en la SERPLAC en el último periodo, generalmente en dependencia de la unidad, tenía un escritorio, cumplía funciones de asesorías para proyectos de inversión, elaboración del mercado municipal. También, dentro del contrato estaba el desarrollar otras funciones que le indicaban su jefatura. El director era Julio Villarroel, era su jefatura. Las instrucciones eran verbales o correos electrónicos o Whats App, memorándum. Las labores debían cumplir con un horario, lo establece la contraloría. Se le pagaba con contraprestación de boletas, pagos mensuales. Tenía control de asistencia, mediante un libro y reloj control.

A la pregunta del Tribunal, responde que él llegó a la municipalidad el año 2015, en el último tiempo el actor fue contratado a honorarios, formulación de iniciativa de inversión y dentro de ella elaboración de un proyecto de mercado municipal. Se puso término por dificultades presupuestarias, estaba ligado a ley de casino, y en el mes de abril, llegó resolución de la superintendencia de casinos que no se iba a proveer de ingresos a las municipalidades y ante eso tuvieron que hacer un ajuste de gastos.

### TESTIMONIAL:

1. Previamente juramentado comparece doña **Mónica Marcela Moraga Llanos**, Rut N° 17.534.505-1, administrativa, domiciliada en Ignacio de la Carrera Cuevas N° 1475, Villa Bicentenario, Coyhaique, quien, en síntesis, declara que conoce al actor, desde el 2014, como encargado de medio ambiente y luego en SERPLAC de la Municipalidad de Coyhaique, en el último periodo estaba encargado de formulación de proyectos, en reuniones con jefe de SERPLAC, trabajo en la cuenta pública en relación a la Unidad de SERPLAC, eso se hace anualmente y es expuesto a la comunidad, el actor trabajaba a honorarios. El director debió instruir al actor, don Julio Villarroel era su jefe. Las instrucciones se dan por correo electrónico, y mediante este medio también debió recibir instrucciones, cumplía horario de lunes a viernes, 44 horas semanales. Era remunerado mensualmente, con emisión de boleta de honorarios conjuntamente con un informe de funciones, se imagina que estos informes eran distintos. El actor volvió a trabajar el 2017, en calidad de honorarios trabajando para rendiciones de programa municipal de empleo, en el año 2018 trabajó en formulación de proyectos, no sabe cuál.

Las labores que hacía el actor eran permanentes para el municipio, prestó servicios hasta mayo de 2020, fue desvinculado por razones políticas, eso fue mencionado en una reunión, que sufría hostigamientos, persecución política. Eso lo sabe por comentarios de concejales.





Contrainterrogada, dice que prestaba servicios en la municipalidad, conoció al actor en medioambiente y luego en SERPLAC, ella es funcionaria a contrata de la Municipalidad, sus jefes son Baldemar Sanhueza. El actor trabajo en programa PMU, en el 2017, mediante contrato de trabajo, eso le consta porque trabajaron juntos. En el último periodo el actor estaba contratado a honorarios, con los mismos beneficios de permisos, horario de entrada y salida.

A la pregunta del Tribunal, dice que, en el año 2017, el actor trabajaba en SERPLAC Municipal, el actor le dijo que estaba contratado mediante un contrato de trabajo. Ha tenido en sus manos un contrato a honorarios, conoce sus cláusulas. No ha tenido en sus manos un contrato de trabajo.

2. Previamente juramentado comparece doña **Ana Rosa Arauz Piñeiro**, Rut N° 12.178.102-6, asistente social, domiciliada en Pasaje los Ñires N° 2837, Villa Valles de Aysén, de Coyhaique, quien, en lo pertinente, manifiesta que conoce al demandante desde enero de 2013, llegó como jefe de departamento Gestión Medioambiente y Servicios, cumplía funciones, el 2014 en SERPLAC, hasta fines de mayo que fue desvinculado, hacía proyectos, cuentas públicas, rendiciones, compras en mercado público, exponía en el Consejo, hizo turno de emergencia, estas son labores permanentes. Las cuentas públicas debían hacerlas los jefes, pero el actor hacía esa labor, también los informes trimestrales, eran encomendadas por el director Julio Villarroel que era su jefe directo. Las instrucciones se realizan vía correo electrónico, Whats App. En el último periodo el actor trabajaba en dependencia municipal, calle Errázuriz, en SECPLAC, allí tenía oficina, marcaba horario de trabajo, se le remuneraba mensualmente, trabajó hasta fines de mayo, por un tema político, es su pareja, ella ha sufrido de acoso laboral, y éste la apoyó presentando un escrito a la contraloría. El actor fue elegido en la directiva del Partido Socialista, apoyaba a Patricio Adio. Ella siente que fue por razones políticas la desvinculación del actor. El actor es un excelente profesional, fue profesor de química en la Universidad. El actor también daba charlas en representación del Municipio, eso no era trabajo de una persona contratada a honorarios.

A la pregunta del Tribunal, responde que ella sigue prestando funciones en el Municipio. No sabe si estaba contratado el actor a contrata u honorarios.

3. Previamente juramentado comparece don **Patricio Rudecindo Adio Ojeda**, Rut N° 10.287.668-7, concejal de la comuna de Coyhaique, domiciliado en Pasaje Galvarino N° 1482, Coyhaique, quien, en resumen, expresa que conoce al demandante alrededor de 8 años, trabajo en SERPLAC de la Municipalidad en el último tiempo, ello lo sabe porque es concejal de Coyhaique, antes estaba en departamento de Medio Ambiente, desconoce la calidad de contrato con el que trabajó el actor. Trabajó en el tema de descontaminación, hizo charlas a las juntas de vecinos, presentó proyecto del Mercado Municipal. Julio Villarroel era su jefe directo. Algunas veces lo vio representando al



Alcalde ante la junta de vecinos, entendía que era el jefe de proyecto, desconoce la calidad jurídica de su trabajo. Esas labores son permanentes, como funcionario municipal, tenía vínculos con el consejo, con las juntas de vecinos.

Dejó de prestar servicios por un tema presupuestario, es fue la razón que le dieron. Supo que fue desvinculado porque tenía acercamiento con él, y había manifestado interés en postular al cargo de alcalde. En una sesión se determinó que fue un acto político por tener acercamiento a él. Las actas son públicas.

Contrainterrogado, dice que no tuvo en sus manos el contrato del actor.

A la pregunta del Tribunal, responde las razones que le dieron por la desvinculación del actor, le dijeron que por la Pandemia se recaudaba menos plata y en consecuencia se debía reducir personal. En sesión de régimen interno se determinó que la verdadera razón de la desvinculación eran razones políticas, además se sigue desvinculando a personas cercanas a él, el actor y Francisco Rubilar, que fue recontratado posteriormente.

**OTROS MEDIOS DE PRUEBA:** No rinde.

**SÉPTIMO:** Que, la parte demandada rindió la siguiente prueba:

**DOCUMENTAL:**

1. Correo Electrónico de 17 de agosto de 2020
2. Decreto Alcaldicio N° 2228 de fecha 29 de mayo de 2020
3. Decreto Alcaldicio N° 155 de fecha 10 de enero de 2020
4. Decreto Alcaldicio N° 530 de fecha 23 de enero de 2020
5. Decreto Alcaldicio N° 5882 de fecha 14 de noviembre de 2017 y contrato de fecha 02 de octubre de 2017
6. Decreto Alcaldicio N° 488 de fecha 24 de enero de 2018 y modificación de contrato de fecha 01 de diciembre de 2017.
7. Finiquito de fecha 02 de abril de 2018.
8. Decreto Alcaldicio N° 2261 de fecha 24 de abril de 2018
9. Carta de término de contrato de fecha 14 de septiembre de 2018
10. Finiquito de fecha 14 de septiembre de 2018
11. Decreto Alcaldicio N° 6955 de fecha 11 de diciembre de 2018 y contrato de 20 de septiembre de 2018.
12. Decreto Alcaldicio N° 6932 de fecha 10 de diciembre de 2018 y modificación de fecha 09 de octubre de 2018.
13. Carta de fecha 26 de diciembre de 2018
14. Comprobante de carta de aviso de Dirección del Trabajo Aysén N° 1101/2019/94.
15. Finiquito de fecha 02 de enero de 2019.
16. Decreto Alcaldicio N° 1068 de fecha 22 de febrero de 2016, aprueba convenio Proyecto Mejoramiento Área Verde Población Pablo Neruda.



17. Decreto Alcaldicio N° 1389 de fecha 14 de marzo de 2018, aprueba convenio proyecto Restauración Invernaderos Vivero Municipal.

18. Decreto Alcaldicio N° 5051 de fecha 28 de septiembre de 2017, aprueba convenio proyecto Mejoramiento Áreas Verdes Sector Sur de la Comuna de Coyhaique.

19. Decreto Alcaldicio N° 5594 de fecha 09 de octubre de 2018, aprueba convenio proyecto Construcción de jardineras en Bandejonas Av. Ogana.

20. Oficio Extraordinario N° 612/2020 de fecha 24 de abril de 2020 de la Superintendencia de Casinos de Juegos.

21. Dictamen N° 50.001 de fecha 27 de agosto de 2010 de la Contraloría General de la República.

22. Dictamen N° O33.224 de fecha 27 de diciembre de 2019 de la Contraloría General de la República.

23. Decretos de pago, Boletas de honorarios e Informes de actividades.

**CONFESIONAL:** La parte demandada se desiste de la prueba de absolución de posiciones ofrecida en la audiencia preparatoria.

**TESTIMONIAL:**

1. Previamente juramentado comparece don **Felipe Andrés Donoso Garay**, Rut N° 17.442.938-3, Ingeniero en Administración de Empresas, domiciliado en Freire N° 1440, Coyhaique, quien, en resumen, dice que es ingeniero en administración de empresa, trabaja en SERPLAC de Coyhaique, conoce al actor, porque trabajó con él, estaba contratado a honorarios, se imputaba a cuentas de iniciativa de inversión, se financiaba con impuesto a la ley de casinos. En el último año se dejó de recibir recursos por efectos de la Pandemia, se cerró el casino, eso fue informado en consejo municipal. El decreto 854 que determina clasificación presupuestaria. Como no existió ingreso municipal por cierre del casino, se debió ajustar los gastos. El actor se vio afectado con la baja de presupuesto, con el ajuste de gastos.

Contrainterrogado, responde que hay unos 10 o 12 funcionarios que se financiaban con presupuesto de casino, sin embargo, no se despidió a todos, sino 3 personas. El actor se desempeñaba en la SERPLAC. Calle Errázuriz, tenía un escritorio y oficina, el jefe directo era don Julio Villarroel, director de SERPLAC, se le entrega instrucciones por correo. No sabe cómo se le entregaban instrucciones al actor.

A la pregunta del Tribunal, dice que no sabe la causa de la desvinculación del actor, entiende que es por la baja de presupuesto de ingreso.

2. Previamente juramentada comparece doña **Carla Fabiola Alborno Neira**, Rut N° 16.364.979-9, psicóloga, domiciliada en Ensenada Valle Simpson, kilómetro 2.5, Coyhaique, quien, en síntesis, expresa que presta funciones en la Municipalidad como encargada de Gestión y Recursos Humanos, se rigen por estatuto administrativo, existe personal de planta, a contrata y honorarios, está contemplado en Estatuto Administrativo



Municipal. Conoció al actor, trabajaba en el Municipio, en el último periodo estaba contratado como prestador de servicios para colaborar en proyectos de iniciativa de inversión, asociado a lo que permite la ley de casino.

Tienen beneficios a feriado legal, permisos administrativos, pago de viáticos, capacitaciones, licencias médicas, también deben controlar su asistencia, a raíz de un informe de Contraloría, que lo exigió mediante una instrucción. Estima que esto último no lo transforma en otra calidad de funcionario, no cambia su naturaleza, sino que es algo que se pacta de común acuerdo. Hay una persona que está contratado bajo Código del Trabajo, que es el Dr. Psicotécnico. Los trabajadores PMU trabajan por Código del Trabajo. Se puso término al contrato del actor, por un informe de la unidad de presupuesto, don Julio Villarroel, en circunstancias de la Pandemia, la administración tomó medidas, como recorte de gastos no esenciales, se priorizaron proyectos, se cambiaron metas y se terminaron contratos de prestación de servicios.

Según el informe, se puso término al contrato, ella lo notificó, era a contar del 1 de junio de 2020.

Contrainterrogada, dice no tener estudios en Derecho Laboral, es Psicóloga, conoce el contrato del actor, se hizo un modelo en su departamento y es revisado por el departamento respectivo. El actor tenía una contraparte técnica, el jefe de la Unidad era el Sr. Villarroel era supervisor del contrato, en el contrato hay un error al decir jefe, ahora los contratos han sido corregidos en esta parte. La prestación de servicios del actor estaba regulada por horario de entrada y salida, debía informar y la unidad técnica procedía al pago.

3. Previamente juramentado comparece don **Julio Alejandro Villarroel Rojas**, Rut N° 13.739.926-1, constructor civil, domiciliado en Divisadero N° 1669, Coyhaique, quien, en lo pertinente, señala que es director de planificación de la Municipalidad de Coyhaique desde enero de 2013, conoce al actor, ya no presta servicios, en el último periodo trabajó con él a honorarios a través de la ley de casino, funciones de estudio y proyectos de diseño del Mercado Municipal, Antes trabajo en Gestión ambiente en 2013, luego en el 2014, asesoría de proyectos, luego renuncio y fue a trabajar a Chile Chico, luego volvió a trabajar en su unidad. También trabajó en PMU, bajo el Código del Trabajo, por obra y faena. Terminado el contrato se hace un finiquito. El actor firmó finiquitos, sin reparos, se firmaba ante Inspector del Trabajo. Luego ingresó a prestar servicios, asesorías, con ley de casinos, formulación de proyectos. En el 2020, en marzo llegó un documento de la superintendencia de casinos que advertía que dejaría de recibir recursos, tendrían una baja sustancial, y por eso decidió informar a la administración mediante memo, por ello se decidió terminar el contrato del actor y dos personas más. Se le pidió entregar el computador, que llegó formateado y no presentó el proyecto que



estaba ofrecido, que debió realizar conforme a su contrato. Se despidió a 3 personas, los profesionales que quedaron trabajando en el departamento están trabajando con media jornada. Hay proyectos que por dos años no tienen presupuesto, resultado de la Pandemia. En el caso del actor, se pagó el diseño del Mercado Municipal y no se hizo.

Contrainterrogado, contesta que el jefe directo del actor era él, respecto del proyecto de mercado municipal, dice que se le entregaba parcialmente información, pero el perfil, pieza clave, no le fue entregado.

No conoce el correo electrónico que da cuenta de la entrega del perfil en formato evitable, pero insiste en que no se entregó el perfil.

Conoce el contrato del actor, de 2020, aparece otras funciones que se le asigne su jefatura, refiere que tenía jefatura directa, cumplir horario, pago mensual a través de un informe, permisos, licencias médicas, causal de termino de contrato.

Existió baja en ley de casino, había 13 personas vinculadas, se despidió a 3, una de ellas se recontrató. El actor entregaba informes, concurrió a exponer en relación a temas de contaminación.

A la pregunta del Tribunal, dice que se despidió a los trabajadores que tenían proyectos de larga data, entre los que se encontraba el actor, se mantuvo sus contratos a profesionales que tenían a cargo proyectos de corta data, pero con media jornada.

**OTROS MEDIOS DE PRUEBA:** No rinde.

**OCTAVO:** Que la controversia planteada por las partes radica en determinar la existencia de la relación laboral en los términos del artículo 70 del Código del Trabajo.

El artículo 70 del Código de Trabajo dispone que el "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". Con ello, de tal definición proporcionada por el citado precepto legal, es posible deducir que estaremos en presencia de una relación laboral cuando concurren copulativamente los siguientes elementos:

a) Dos partes ligadas por un vínculo. Por un lado el empleador, acreedor del trabajo y, por el otro, el trabajador, deudor del trabajo. Entendiendo en cada sujeto, la definición otorgada en el artículo 30 del mismo Código del Trabajo;

b) La prestación de servicios personales. La prestación de servicios constituye la principal obligación del trabajador. Prestación que el dependiente debe efectuar en forma personal, no resultando posible que encargue ésta a otro sujeto;

c) Una remuneración por la prestación de servicios.

d) Subordinación o dependencia. Este elemento no es definido por el legislador, pero la abundante jurisprudencia emanada de la Dirección del Trabajo y de los Tribunales de Justicia, nos proporciona una idea precisa y clara de lo que es una prestación de



servicios bajo dependencia y subordinación. Así, la dependencia y subordinación es el sometimiento, en relación a las labores ejecutadas, a la forma y condiciones impuestas por el empleador, de modo tal que constituye un elemento esencial del contrato de trabajo, no configurándolo por sí mismo, siendo así indispensable que concurran todos los otros indicados.

La subordinación o dependencia se materializa a través de diversas manifestaciones concretas, tales como la continuidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, la subordinación a reglas y controles de diversa índole, circunstancia esta última que se traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador, impartiendo órdenes o instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y en el deber del trabajador de acatar y obedecer.

**NOVENO:** Que de acuerdo a las reglas del onus probandi correspondía a la parte demandante acreditar o probar la relación laboral que alega en su demanda.

**DÉCIMO:** Que, conforme los escritos de discusión, el objeto del presente litigio consiste fundamentalmente en determinar el régimen jurídico aplicable a la vinculación existente entre el actor y la demandada la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.

Que, para la resolución del conflicto sometido a la decisión del tribunal, debe tenerse presente, en primer lugar, lo dispuesto en el artículo 1° del Código del Trabajo, que establece: "Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la administración del estado, centralizada y descentralizada, del congreso nacional y del poder judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código".

Asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que indica: "Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se



podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este estatuto".

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, de las disposiciones mencionadas es posible establecer la aplicación del Código del Trabajo a todas las vinculaciones de orden laboral habidas entre empleadores y trabajadores, entendiendo por laboral, en general, a aquellas que reúnan las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo, es decir, aquella relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha prestación, siendo la existencia de la subordinación y dependencia el elemento esencial y mayormente determinante y caracterizador de una relación de este tipo.

Que, como se dijo, la controversia entre las partes del presente juicio, consiste en determinar si es efectivo lo sostenido por el demandante, quien estima que, concurriendo los elementos propios de un vínculo de subordinación y dependencia conforme lo establece el artículo 7 y 8 del Código del Trabajo, debe aplicarse tal legislación. Por otro lado, la Municipalidad demandada sostiene que el marco jurídico que rige a los funcionarios de esa entidad es la Ley N° 18.883, por lo que afirma que la contratación del actor no pudo realizarse conforme a la normativa del Código del Trabajo, por impedírselo el estatuto respectivo y la reglamentación a la que debe someter sus actuaciones como órgano de la administración del estado, subsumiendo la vinculación que la unió con el actor en la disposición del artículo 4° de la Ley N° 18.883, de manera tal que no le resulta aplicable el estatuto laboral.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, en el citado artículo 1° del Código del Trabajo, se ha dicho por la jurisprudencia, se consignan, una excepción y una contra excepción. En cuanto a la excepción a la aplicación del Código del Trabajo la constituyen los funcionarios de la administración del estado, centralizada y descentralizada, del congreso nacional y del poder judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, pero esta situación excepcional tiene cabida únicamente en el evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial; y la contra excepción se formula abarcando a todos los trabajadores de las entidades señaladas, a quienes se vuelve a la regencia del código del trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

En otros términos, se ha establecido se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la administración del estado que no se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial y, aun contando con dicho estatuto, si



éste no regula el aspecto o materia de que se trate; en este último caso, en el evento que no se oponga a su marco jurídico.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, de este modo , se ha dicho que la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código del Trabajo para las personas naturales contratadas por la administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece para el caso el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma prescribe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, resuelto lo anterior, corresponde establecer en autos, conforme a la prueba rendida, si las funciones desarrolladas por el demandante para la Municipalidad demandada se ajustan o no lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 18.883, en particular, si la prestación de sus servicios se enmarcó dentro de algunas de las hipótesis ya referidas, esto es, si se trata de profesionales, técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, para realizar labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; que, se trate de extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera; o bien, que se presten servicios para cometidos específicos.

Corresponde, en consecuencia, revisar que los servicios prestados por el actor correspondieron o no a los cometidos específicos establecidos en sus respectivos contratos.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, para determinar lo anterior, se tendrá especialmente presente las siguientes consideraciones y hechos que se han logrado establecer del análisis y ponderación de las probanzas aportadas por las partes, de acuerdo a las normas de la sana critica, sin contradecir los principios de lo lógica ni las máximas de la experiencia de este tribunal, considerando su multiplicidad, gravedad, precisión, conexión y concordancia, a saber:

a) Que, para este efecto se incorporó al juicio abundante prueba documental, resultando trascendente destacar que el actor incorporó correos electrónicos, publicaciones en Facebook, publicaciones de whats App, tales como los signados en los N° 1 al 13 del considerando sexto precedente, que dan cuenta de solicitudes al actor para concurrir en representación del Municipio de Coyhaique a participar en reuniones, a exponer, y la intervención de éste en estos eventos, tareas que, a juicio de este sentenciador, no guardan





relación con las funciones descritas en los contratos de prestación de servicios celebrados por las partes ( Decretos N° 530 y N° 155), según se describe más adelante.

b) Se incorporó, por la demandante, además, registro de asistencia del actor, desde enero de 2019 a marzo de 2020. (N° 17 del considerando sexto)

c) La demandada incorporó decretos de pago de boletas de honorarios e informes de actividades relacionadas a estos pagos.

d) Consta, de la documental incorporada por la demandada ( N° 5 a 14 del considerando séptimo), que el actor prestó servicios para la demandada, desde el 1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, mediante contratos de trabajo, los que en su oportunidad fueron finiquitados.

Luego, desde el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, suscribió contratos de prestación de servicios a honorarios, según consta en Decretos N° 530, de 23 de enero de 2019, y Decreto N° 155, de 10 de enero de 2020, poniéndose término anticipado el 1° de junio de 2020, según consta en Decreto N° 2.228 y en correo electrónico de 17 de agosto de 2020, todos documentos incorporados por la demandada.

e) Que, en el Decreto N° 530, de 23 de enero de 2019, que aprueba contrato de prestación de servicios entre la Municipalidad y el actor, en la cláusula tercera, se establecen las siguientes funciones: rendiciones Proyectos FRIL Infraestructura y SUBDERE, elaboración de perfiles para proyectos de inversión FNDR, elaboración de proyectos bajo metodología Circular 33, elaboración de proyectos SUBDERE, otras funciones que le asigne su jefatura.

f) Que, el Decreto N° 155, de fecha 10 de enero de 2020, que aprueba contrato de prestación de servicios entre Municipalidad y el actor, en la cláusula tercera del contrato, se determinan sus funciones, que son: elaboración de proyecto Diseño de Mercado Municipal de Coyhaique, rendiciones Proyectos FRIL, infraestructura y SUBDERE, elaboración de perfiles de proyectos de inversión FNDR, elaboración de Proyectos bajo metodología Circular 33 y otras funciones que le asigne la jefatura. En la cláusula décimo sexta, se establecen las razones para poner término anticipado al contrato, que son: incumplimiento de obligaciones o funciones, renuncia voluntaria y no acatar instrucciones de la jefatura.

g) Que, el demandante, por otra parte, aportó prueba testimonial de tres testigos, Mónica Moraga Llanos, Ana Arauz Piñeiro y Mauricio Adio Ojeda, quienes refirieron, en términos generales, las condiciones en que el demandante prestó servicios para la Municipalidad demandada, de lo que tenían conocimiento directo atendido que igualmente trabajan allí, según lo declaran el primero y último de estos testigos, y todos son coincidentes en manifestar que el actor tenía una jefatura directa, don Julio Villarroel, y que se daban las instrucciones mediante correos electrónicos, WhatsApps o en forma



verbal. Esto último, además, es ratificado por los dichos de los testigos de la propia demandada, Felipe Donoso Garay y el propio Julio Villarroel y, el absolvente don Orlando Alvarado Díaz, según consta en el considerando sexto y séptimo, precedente.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, conforme a las probanzas descritas en el considerando anterior, es posible concluir que los servicios del demandante para la demandada se desarrollaron fuera del marco legal que establece el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, pues el demandante no realizó labores accidentales y no habituales de la Municipalidad, toda vez que desempeñó tareas que en la práctica no se condicen con el cometido previsto en los contratos señalados en las letras d) y f) del considerando precedente. Además, en ambos contratos se refiere a que el actor tendrá una jefatura, cuestión que aparece claramente reforzada con los dichos de los testigos tanto de la demandante como de la demandada, según se refiere en la letra g) del considerando anterior.

Que, por consiguiente, no es posible dar por establecido que las labores desarrolladas por el actor fuesen para un cometido específico, es decir, para labores puntuales, siendo aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal, pues al haberse desempeñado en forma continua para la demandada más de 1 año y siete meses cumpliendo sus funciones en el mismo Departamento, se excluye la posibilidad de que sus labores se encuentren dentro de la tercera hipótesis del citado artículo cuarto.

Que, así las cosas, es dable establecer que el actor prestó servicios para la demandada en el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2019 y hasta el 1 de junio de 2020, en forma ininterrumpida, tal como se ha indicado en la demanda.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, en consecuencia, habiéndose establecido que la contratación del actor mediante la celebración de sucesivos e ininterrumpidos contratos a honorarios, no se encuadra dentro de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 18.883, es preciso concluir, que éste prestó servicios en las condiciones previstas por el Código del Trabajo, y por lo tanto, que la naturaleza del vínculo que unió a las partes de este juicio, es laboral, y no estatutaria como lo ha señalado la demandada, ya que como se dijo aquella no justificó la contratación en los presupuestos ya indicados.

Que, en este sentido, el razonamiento efectuado tiene su fundamento en la circunstancia que el Código del Trabajo, constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, por cuanto una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del estatuto laboral, en una situación de precariedad laboral que no tiene justificación alguna.



Que, se desestiman las demás alegaciones planteadas por la parte demandada referente a la imposibilidad de declarar el tribunal la existencia de relación laboral, por ser contraria a la teoría de los actos propios, ya que en este caso es posible señalar que, conforme a las normas de la máxima de la experiencia de este tribunal, es plenamente factible colegir que el trabajador no se encontraba posibilitado de exigir a la Municipalidad demandada su contratación bajo la normativa laboral.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, establecida la existencia de la relación laboral entre las partes, cabe emitir pronunciamiento respecto de la acción por despido deducida en autos. Al efecto, la demandada acompañó correo electrónico, de fecha 17 de agosto de 2020 y Decreto Alcaldicio N° 2.228, de 29 de mayo de 2020, en los que se comunica al actor el término de su contrato, a contar del 1° de junio de 2020.

Que, por lo anterior, es posible establecer que la terminación de los servicios del actor obedeció a la decisión unilateral de la demandada.

Que, por consiguiente, y habiéndose establecido que el vínculo que unió a las partes es de naturaleza laboral, sin que se acreditara el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, se concluye que el término de los servicios del actor, es injustificado y sin aviso previo, por cuanto si bien se notificó la terminación de los servicios mediante el envío de un correo electrónico, lo cierto es que dicho aviso no se dio con la antelación contemplada en la norma legal citada, esto es, con a lo menos 30 días, por lo que se accederá a lo demandado por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicios, más el incremento del 50% por sobre esta última, conforme lo establece el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, las indemnizaciones que se ordenarán pagar serán determinadas sobre la base de cálculo requerida en la demanda de autos, ya que la demandada no controvertió tal suma, esto es, \$ 1.761.638.-

**VIGÉSIMO:** Que, establecida la existencia de relación laboral entre las partes, corresponde ordenar el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social durante todo el periodo trabajado por el actor, por cuanto la demandada no efectuó el pago de las mismas.

Que, en este sentido, se deberá considerar las sumas percibidas por el demandante mensualmente durante toda la vigencia de la relación laboral.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en cuanto a petición de la demandada de declarar nulos o ineficaces los finiquitos suscritos entre las partes, debe tenerse presente que el finiquito ha sido definido por la Dirección del Trabajo como "un acto por el cual un trabajador y un empleador ratifican o aprueban ante un ministro de fe el término de la relación laboral". Por su parte, la jurisprudencia ha definido al finiquito como "acto jurídico bilateral en el que las partes dejan constancia de la terminación del contrato de



trabajo y de las condiciones en que ella se produce" (Excma. C. Suprema, sentencia de junio 2007, Rol N<sup>o</sup> 1320-2007).

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado de manera reiterada que el finiquito legalmente celebrado tiene poder liberatorio respecto de las prestaciones que en él se consignan y que aparecen pagadas, constituyendo un título ejecutivo respecto de aquellas que en él aparecen pendientes.

Que, en el caso de autos, es un hecho no controvertido la existencia de finiquitos suscrito por las partes, apareciendo del mérito de los instrumentos acompañados por la demandada, y teniendo presente la naturaleza del finiquito, que en última instancia es de carácter transaccional, debe tener su fundamento en que la finalidad última del finiquito es evitar una discusión posterior respecto a las materias que se regulan en él. De otra forma, el poder liberatorio del finiquito carecería de toda relevancia, puesto que cualquiera de las partes podría pasar sobre él y pretender se le reconozcan derechos ya consensuados, vulnerándose el efecto de cosa juzgada que el artículo 2.460 del Código Civil reconoce a la transacción, más aun, considerando que, en este caso, no se ha invocado por el demandante algún vicio de consentimiento que justifique su pretensión.

Como se desprende de los documentos incorporados por la demandada, hay una declaración expresa del demandante en orden al pago íntegro y oportuno de todas sus remuneraciones y son precisamente algunas de ellas la que pretende se le reconozcan en esta causa, motivo por el cual no se accederá a la petición de la demandante, en esta parte.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en lo atinente a las prestaciones laborales demandadas relativas al pago del feriado legal y proporcional reclamado y, ante ausencia de probanzas al efecto, que acrediten su otorgamiento o compensación, sólo cabe concluir que éste rubro se adeuda y, por ende, deberá el demandado pagar al actor el feriado legal correspondiente a la suma de \$ 822.094.-

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, toda la prueba ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica, sin alterar los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia de este tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo; y, el resto de las alegaciones y probanzas no contiene información que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en consideración para resolver la controversia en este pleito.

Que, por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 41, 42, 63, 67, 73, 162, 168, 173, 177, 453 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal opuesta por la demandada.



II.- Que, se acoge la demanda de autos, declarándose que entre las partes de este juicio existió un vínculo de subordinación y dependencia, en los términos del artículo 7 y 8 del Código del Trabajo, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 1 de junio de 2020. Por consiguiente, la demandada deberá pagar al demandante las siguientes sumas por los conceptos que se indican:

- \$ 1.761.638.-, por indemnización sustitutiva de aviso previo, según prevé el inciso cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo.

- \$ 3.523.276.-, por indemnización por años de servicios, (1 año y 7 meses) conforme lo establecido en el artículo 163 del Código citado.

- \$ 1.761.638.-, por incremento del 50% contemplado en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo.

- \$ 822.094.- por concepto de feriado legal y proporcional.

III. Que las cantidades señaladas precedentemente se pagarán con los reajustes e intereses que se indican en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que, la demandada deberá enterar en los organismos previsionales que correspondan las cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía del demandante, por el período trabajado, esto es, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 1 de junio de 2020, conforme se ordenó en el considerando vigésimo. Para tales efectos, notifíquese a los organismos respectivos con la finalidad que inicien el cobro de tales conceptos, por la vía más expedita.

V. Que, cada parte pagará sus costas.

VI. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día; en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes a la unidad de cumplimiento ejecutivo del Tribunal.

Devuélvase los documentos incorporados por las partes, dentro del término de 30 días de ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de ser destruidos.

Regístrese, notifíquese y, archívese, en su oportunidad.

RIT O- 53-2020.

RUC 20-4-0287050-9.

Dictada por don **OSCAR ALBERTO BARRIA ALVARADO**, Juez del Juzgado de letras del Trabajo de Coyhaique.

